



**UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS**



**TESIS:**

**“INCORRECTA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 24 DEL D.S.  
N°013-2008-JUS POR PARTE DEL ORGANO  
JURISDICCIONAL COMO CAUSA DE DILACIÓN EN LOS  
PROCESOS PREVISIONALES”**

**PRESENTADO POR:**

**NIMIA ELIZABETH CASTILLO SOSA**

**ASESOR:**

**VICTOR ANACLETO GUERRERO**

**PARA OPTAR**

**EL TITULO DE ABOGADO**

**LAMBAYEQUE, 2019**

**Tesis denominada “INCORRECTA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 24 DEL D.S. N°013-2008-JUS POR PARTE DEL ORGANO JURISDICCIONAL COMO CAUSA DE DILACIÓN EN LOS PROCESOS PREVISIONALES”, presentada para optar el TITULO DE ABOGADO, por:**

.....  
**NIMIA ELIZABETH CASTILLO SOSA**  
**BACHILLER**

.....  
**VICTOR ANACLETO GUERRERO**  
**ASESOR**

**APROBADO POR:**

.....  
**AMADOR NICOLÁS MONDOÑEDO VALLE**  
**PRESIDENTE DEL JURADO**

.....  
**LEOPOLDO YZQUIERDO HERNANDEZ**  
**SECRETARIO DEL JURADO**

.....  
**CÉSAR VARGAS RODRIGUEZ**  
**VOCAL DEL JURADO**

## **DEDICATORIA**

*La presente investigación está dedicada a mis padres por haberme brindado la mejor de las herramientas: educación.*

*Asimismo, a una de las personas que me enseñó a querer más el Derecho a través de la práctica, Doctora Lucía Esther Deza Sanchez, quien fue la principal mentora de esta investigación.*

## **AGRADECIMIENTO**

*Agradezco a Dios por las experiencias en mi vida y a las personas que han llegado para quedarse en ella.*

*Al Doctor Víctor Anacleto Guerrero, por no dudar en apoyar la elaboración de esta investigación.*

*A todo ese equipo humano que conforman la Tercera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, por su incansable labor en el afán de lograr justicia y además por el apoyo incondicional.*

## INDICE

DEDICATORIA .....	i
AGRADECIMIENTO .....	ii
RESUMEN.....	viii
ABSTRACT .....	ix
INTRODUCCION .....	1
CAPITULO I .....	3
I. ASPECTOS METODOLÓGICOS. ....	3
1. REALIDAD PROBLEMÁTICA.....	3
1.1. Planteamiento del problema. ....	3
1.2. Formulación del problema.....	6
1.3. Justificación e importancia del estudio. ....	7
1.3.1. Justificación del estudio. ....	7
1.3.2. Importancia del estudio. ....	8
1.4. Objetivos. ....	8
1.4.1. Objetivo General.....	8
1.4.2. Objetivos Específicos. ....	8
1.5. Hipótesis. ....	9
1.6. Variables. ....	9
1.6.1. Variable independiente. ....	9
1.6.2. Variable dependiente. ....	9
1.7. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	9
1.7.1. Métodos.....	9
1.7.2. Técnicas.....	10
1.7.3. Instrumentos. ....	11
CAPITULO II.....	12
MARCO TEORICO .....	12
2.1. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y EL ÓRGANO JURISDICCIONAL EN LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA.....	12
PARTE I: LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.....	12
2.1.1. TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA .....	12
2.1.2. DEBIDO PROCESO .....	13
2.1.3. DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA .....	15
2.1.3.1. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO .....	16
2.1.3.2. PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.....	18
PARTE II: EL ÓRGANO JURISDICCIONAL EN EL PERÚ .....	22
2.1.4. ÓRGANO JURISDICCIONAL .....	23

2.1.5. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL Y LA APLICACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL PROCESO.....	27
2.1.6. DEBERES Y DERECHOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL .....	29
2.1.7. EL ROL DEL JUEZ EN LOS PROCESOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS.....	31
2.1.8. PRINCIPIOS DEL PROCESO CIVIL. EXPLICACIÓN RESPECTO DEL PROCESO DE LA LPCA .....	35
2.1.8.1. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.....	35
2.1.8.2. Principios de dirección e impulso del proceso .....	35
2.1.8.3. Los fines del proceso e integración de la norma procesal .....	36
2.1.8.4. Los principios de iniciativa de parte y conducta procesal.....	36
2.1.8.5. Principios de inmediación, concentración, economía y celeridad procesal .....	37
2.1.8.6. La socialización del proceso. La búsqueda de la igualdad procesal.....	38
2.1.8.7. El <i>iura novit curia</i> : Juez y Derecho.....	38
2.1.8.8. Los principios de vinculación y formalidad.....	38
2.1.8.9. El principio de doble instancia .....	39
2.1.9. PRINCIPIOS DE LA LEY DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO....	39
2.1.9.1. Principio de integración.....	39
2.1.9.2. El principio de igualdad procesal .....	40
2.1.9.3. El principio de favorecimiento del proceso .....	40
2.1.9.4. Principio de suplencia de oficio .....	40
2.2. EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO .....	42
2.2.1. ASPECTOS GENERALES.....	42
2.2.2. NATURALEZA JURÍDICA .....	44
2.2.3. LAS PARTES EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.....	45
2.2.4. LA PRUEBA EN EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.....	47
2.2.4.1. PRUEBA .....	47
2.2.4.2. DERECHO A PROBAR.....	48
2.2.4.3. ACTIVIDAD PROBATORIA .....	49
2.3. PROCESOS PREVISIONALES.....	52
2.3.1. DERECHO PREVISIONAL: SEGURIDAD SOCIAL.....	52
2.3.2. DERECHO A LA PENSIÓN.....	53
2.3.3. PRINCIPIOS DEL DERECHO A LA PENSIÓN.....	55
2.3.4. JUBILACIÓN.....	57
2.3.5. SISTEMA PREVISIONAL PERUANO – PENSIÓN DE JUBILACIÓN.....	59
2.4. EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN MATERIA PREVISIONAL ..	63
2.4.1. DEMANDA.....	64
2.4.2. REMISION DE LOS ACTUADOS ADMINISTRATIVOS .....	65
2.4.2.1. EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO.....	66
2.4.2.2. EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO COMO PRUEBA PROCESAL EN PROCESOS PREVISIONALES.....	68

2.4.3. POSIBLES CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL RETARDO DE LA REMISIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS .....	70
2.4.4. REMISIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS EN LEGISLACIÓN COMPARADA.....	73
2.4.4.1. ESPAÑA.....	73
2.4.4.2. FRANCIA .....	75
2.4.4.3. ARGENTINA.....	76
2.4.4.4. VENEZUELA .....	78
CAPITULO III: .....	79
ANALISIS Y RESULTADOS .....	79
3.1. INSTITUCIÓN.....	79
3.2. ÓRGANO JUDICIAL.....	79
3.3. FUENTE DE INFORMACIÓN. ....	79
3.4. POBLACIÓN .....	79
3.5. MUESTRA. ....	79
3.6. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS.....	82
3.7. PROPUESTA .....	83
CONCLUSIONES .....	88
RECOMENDACIONES.....	90
BIBLIOGRAFIA .....	91
ANEXOS.....	95

## **INDICE DE TABLAS**

<b>TABLA 1</b> .....	80
<b>TABLA 2</b> .....	81



## **INDICE DE FIGURAS**

<b>GRAFICO 1</b> .....	80
<b>GRAFICO 2</b> .....	82

## RESUMEN

La investigación realizada, plasmada en el presente trabajo, tiene como principal objetivo analizar si la demora de los procesos contenciosos administrativos con pretensiones previsionales, es a causa de la incorrecta aplicación del artículo 24° del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS (referente a la remisión de los actuados administrativos), por parte del juez; la misma que tiene como una principal consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva de los justiciables que en su mayoría constituyen personas mayores de edad; así como, los principios procesales inmersos en un proceso judicial. Tal problema descrito, se realizará de acuerdo a la información obtenida y analizada de acuerdo al tema previsto, además de la revisión minuciosa que se logrará realizar a los expedientes contenciosos administrativos previsionales de la jurisdicción de Lambayeque; del cual, si del estudio realizado, se tuviese una respuesta afirmativa, surge como propuesta la modificación del mencionado artículo con miras al favorecimiento de los derechos de ambas partes procesales.

*Palabras claves: Derechos fundamentales, Expediente administrativo, Proceso Contencioso Administrativo, Remisión de actuados administrativos.*

## **ABSTRACT**

The research carried out, reflected in the present work, has as its main objective to analyze whether the delay of administrative contentious proceedings with social security claims is due to the incorrect application of Article 24 of Supreme Decree No. 013-2008-JUS (referent) to the remission of administrative acts), by the judge; the same one that has as a main consequence the violation of the fundamental rights of due process and the effective jurisdictional protection of the people who are mostly of legal age; as well as, procedural principles immersed in a judicial process.

Such problem described, will be carried out according to the information obtained and analyzed according to the planned topic, in addition to the thorough review that will be made to the contentious administrative records of the jurisdiction of Lambayeque. Of which, if the study carried out, there was an affirmative answer, the proposal to modify said article with a view to favoring the rights of both parties to the proceedings arose.

Key words: Fundamental Rights, Administrative File, Administrative Contentious Process, Remission of administrative acts.

## INTRODUCCION

El proceso contencioso administrativo, nace como un medio eficiente y eficaz para resolver las situaciones controvertidas entre los administrados y la administración, siempre que ésta no actúe conforme a derecho y vulneren los derechos fundamentales de los ciudadanos. Justamente, por esta razón surge un proceso contencioso administrativo que, en un principio estuvo limitada a realizar un análisis si la administración actuó o no conforme a Derecho; del cual tal idea ha ido cambiando con el transcurrir del tiempo y ahora se busca saber si la administración respetó básicamente los derechos fundamentales de los administrados, siendo el Proceso Contencioso Administrativo uno de plena jurisdicción.

Es así que, el administrado al tener esa necesidad de amparo de sus derechos vulnerados acude a las instancias judiciales en busca de solución a su incertidumbre jurídica o conflicto de intereses originado contra las administraciones públicas, como en los casos de pretensiones centradas básicamente en el reconocimiento de años de aportaciones y posterior pago de aquellas, esto es las pensiones de jubilación que, son demandas interpuestas contra la Oficina de Normalización Previsional, entidad que muy rara vez atiende en vía administrativa las peticiones de personas con límite de edad laboral, y deja con esto la aglomeración de carga procesal en los diferentes juzgados especializados en materia contencioso administrativa.

Tales casos, pueden iniciar de manera adecuada hasta llegar a un punto de demora, vulnerando el principio de celeridad y economía procesal, y además de ello los derechos fundamentales de la Tutela Jurisdiccional Efectiva y del Debido Proceso, los cuales protegen a los ciudadanos ante incidencias dentro de los procesos. Siendo un problema de demora, la remisión de los expedientes administrativos a los juzgados donde se ha originado el reclamo del ciudadano en contra de la entidad administrativa; el mismo que debe ser erradicado a fin de obtener un proceso que beneficie a las personas mayores de edad, referidas aquellas que han alcanzado el límite de edad en el ámbito laboral (65 años de edad) y de esta manera beneficiar y amparar su existencia.

Por lo que, el presente trabajo de investigación tiene como impulso primordial investigar los motivos existentes de las dilaciones, justo en ese acto procesal importante del pedido de los expedientes administrativos en los procesos de pensiones de jubilación, los mismos motivos que se obtendrán de la revisión de expedientes judiciales referidos netamente a casos pensionarios, tramitados ante la Tercera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, pues serán estos los que confirmarán o rechazarán la hipótesis planteada; mencionando en el desarrollo del presente, los derechos fundamentales de la Tutela Jurisdiccional Efectiva y del Debido Proceso en la justicia administrativa, así mismo el rol que cumple el Órgano Jurisdiccional en los procesos contenciosos administrativos de acuerdo a la protección de estos derechos fundamentales y principios citados a nivel contencioso administrativo como procesal civil, pues han de utilizarse estos últimos para complementar los primeros. Asimismo, los aspectos generales e importantes del Proceso Contencioso Administrativo, y de los procesos previsionales, mencionando en ello el derecho pensionario y lo consistente a la jubilación, así como lo referido al Sistema Nacional de Pensiones; para finalizar con lo referente a la remisión de los expedientes administrativos en nuestra legislación y en la extranjera.

## CAPITULO I

### I. ASPECTOS METODOLÓGICOS.

#### 1. REALIDAD PROBLEMÁTICA.

##### 1.1. Planteamiento del problema.

El derecho contencioso administrativo, en la legislación peruana, viene a constituirse con el enunciado previsto en el artículo 148 de la Constitución Política del Perú, el cual señala que *“Las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso-administrativa.”* Siguiendo la línea de considerar a la acción contencioso administrativa como una solución a problemas presentados en resoluciones administrativa; que a nivel judicial deben ser resueltos en el breve tiempo posible, dando con ello prioridad a obtener un efectiva Tutela Jurisdiccional y por ende un debido proceso.

A saber, la Tutela Jurisdiccional Efectiva, se prescribe en el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil como Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, en la cual establece: *“Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso.”*

A ello, el autor ORTIZ SANCHEZ(2014) hace mención a GONZALES PEREZ, quien afirma que la tutela jurisdiccional efectiva es:

(...) el derecho de toda persona a que se le “haga justicia”; a que cuando pretenda algo de otra, esta pretensión sea atendida por un órgano jurisdiccional, a través de un proceso con unas garantías mínimas.(pág. 36)

Por lo que, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, es adquirida por toda persona, integrante de una sociedad, a fin de que pueda acudir a los órganos jurisdiccionales para la defensa o en su defecto, el ejercicio de sus derechos o intereses, con la plena confianza que su pedido será atendido a través del trámite de un proceso, que le ofrezca

las garantías para su efectivo desarrollo y culminación justo, obteniendo un debido proceso.

Siguiendo con las principales prioridades, el doctor LANDA ARROYO(2002), cita al autor, BUSTAMANTE, quien señala que el debido proceso es:

(...) un derecho fundamental de toda persona -peruana o extranjera, natural o jurídica- y no solo un principio o derecho de quienes ejercen la función jurisdiccional. En esa medida, el debido proceso comparte el doble carácter de los derechos fundamentales: es un derecho subjetivo y particular exigible por una persona y, es un derecho objetivo en tanto asume una dimensión institucional a ser respetado por todos, debido a que lleva implícito los fines sociales y colectivos de justicia. (pág. 448)

En tanto, se entiende que, el debido proceso protege a las personas de las leyes contrarias a los derechos fundamentales, por constituirse como tal; haciendo válidas a las sentencias en su razonabilidad y, además, que se cumplan ciertas formalidades en el trámite y desarrollo de un proceso hasta llegar a una solución.

De acuerdo con lo anterior, para que los derechos antes descritos tengan la prioridad que se merecen, cumple el Juez un rol importante, como así se ha señalado en el Capítulo II de la Sección Segunda del Código Procesal Civil; del cual menciona los deberes, facultades y responsabilidades de los jueces en el proceso, refiriendo con ello a los principios procesales que se debe tener en cuenta en el desarrollo de un proceso judicial, con el fin de respetar a los justiciables.

Sin embargo, es preocupante la situación que se observa en los procesos contenciosos administrativos, cuando se trata de temas previsionales, esto es de otorgar una pensión de jubilación digna a personas con condición de asegurados en la Oficina de Normalización Previsional; pues esta entidad administrativa retrasa y acumula los procesos, teniendo como cifras lo señalado por el Congresista Yonhy Lescano Ancieta en la Exposición de Motivos de su Proyecto de Ley de Desjudicialización de Pensiones de la ONP – Proyecto de Ley N° 1737/2017-CR, en la cual literalmente hace hincapié que:

(...) la cantidad de juicios que mantiene la ONP en el tiempo es de una gran magnitud, al punto que, por ejemplo, el año 2010, en el contexto de un cambio de estrategia procesal de esta entidad, su dirección decidió archivar 90,105 procesos judiciales por la vía de desistimientos, allanamientos, conclusiones anticipadas, precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional, etc; sin embargo, a diciembre del 2014, había en trámite 120,487 procesos, y pese al esfuerzo de reducir esta carga, a diciembre del 2015, todavía eran 100,447 juicios, y a marzo del 2017, son 79,762 juicios, con una clara tendencia a superar holgadamente los 100,000 procesos cuando se llegue a diciembre del 2017(...)

Dicho lo anterior, el presente trabajo de investigación surge de la necesidad de conocer el porqué de los retrasos en los procesos contenciosos administrativos referidos a temas previsionales y, a su vez, evaluar la conducta que tienen los jueces especialistas en estos procesos, cuando se trata de aplicar el artículo 24 del D.S. N° 013-2008-JUS (Artículo 22 de la Ley N° 27584), referido a la remisión de actuados administrativos, el cual prescribe:

*Artículo 24.- Remisión de actuados administrativos*

*Al admitir a trámite la demanda, el Juez ordenará, de ser el caso, a la Entidad Administrativa, a fin de que el funcionario competente remita copia certificada del expediente con lo relacionado a la actuación impugnada, en un plazo que no podrá exceder de quince días hábiles, con los apremios que el Juez estime necesarios para garantizar el efectivo cumplimiento de lo ordenado, pudiendo imponer a la Entidad multas compulsivas y progresivas en caso de renuencia.*

*El Juez además de realizar las acciones antes referidas en el párrafo anterior, ante la manifiesta renuencia a cumplir con el mandato, prescindirá del expediente administrativo.*

*El incumplimiento de lo ordenado a la entidad administrativa no suspende la tramitación del proceso, debiendo el Juez en este caso aplicar lo dispuesto en el Artículo 282 del Código Procesal Civil, al momento de resolver; sin perjuicio que tal negativa pueda ser apreciada por el Juez como reconocimiento de verdad de los hechos alegados.*



Pues, bien se conoce que los procesos previsionales, sufren dilación a causa de la falta de compromiso por parte de la administración en cumplir con los mandatos ordenados por el juez en los actos procesales desarrollados en un proceso, siendo uno de estos problemas, la remisión del expediente administrativo en el plazo exigido, para cada caso en concreto; pues es entendido que el expediente administrativo es uno de los medios probatorios principales en los procesos contenciosos administrativos (aún más en los previsionales), así como se prescribe en el artículo 27 del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, el cual señala: “*En el proceso contencioso administrativo, la actividad probatoria se restringe a las actuaciones recogidas en el procedimiento administrativo...*”, pues de lo actuado administrativamente, el Juez podría aclarar los hechos narrados por la parte quien reclama el derecho y de esta manera realizar un razonamiento adecuado, con el fin de obtener un fallo justo para las partes que actúan en el proceso.

Por lo que, de acuerdo a lo expresado, la sociedad merece un trato justo a los derechos inherentes a toda persona, y más aún, cuando estos derechos definen su existencia, como personas de la tercera edad, del cual ha de existir un trato preferente y especial cuando solicitan el reconocimiento de algún derecho que ha sido vulnerado por las entidades propias del Estado, siendo los llamados a resarcir tales daños, los órganos judiciales, quienes debido a las facultades otorgadas, velarán porque se realice justicia en cada caso presentado.

## **1.2. Formulación del problema.**

¿Existe dilación de los procesos contenciosos administrativos en materia previsional debido a la incorrecta aplicación del artículo 24 del D.S. N° 013-2008-JUS por parte del Juez en la jurisdicción de Lambayeque?

### **1.3. Justificación e importancia del estudio.**

#### **1.3.1. Justificación del estudio.**

El presente problema propuesto, se justifica en la demora que existe en dar solución a los procesos contenciosos administrativos en materia pensionaria, del cual, conlleva con ello al trato especial que debe otorgarse a las personas de la tercera edad en el reclamo de sus derechos previsionales, esto es, el reclamo de las pensiones de jubilación o derivados de ello, ante la entidad de la Oficina de Normalización Previsional.

Tal derecho se detalla en el artículo 11 de la Constitución Política del Perú, cuando afirma *"El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones... de pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas..."*; teniendo como base *el respeto de la dignidad de la persona como fin supremo de la sociedad y el Estado*, prescrita en el artículo 1 de la Carta Magna, que la administración y en su defecto el órgano jurisdiccional, deben tener en cuenta para el acceso del derecho de prestaciones pensionarias, que son, a fin de cuentas, la devolución de los aportes que cada persona ha realizado a lo largo de su vida laboral, del cual tienen derecho a que estos montos (sumas de dinero) sean devueltos de acuerdo a lo establecido en las leyes y normas complementarias que el mismo Estado ha sido partícipe de su promulgación.

Es por ello que, la presente investigación, engloba a un sector de la población vulnerable del Estado que necesita de apoyo para el correcto desarrollo de sus procesos dentro de las jurisdicciones, del cual el juez, especializado en temas contenciosos previsionales, como director del proceso e impulsor del mismo, está en las facultades de salvaguardar el derecho del Debido Proceso y con ello la Tutela Jurisdiccional Efectiva; así como cumplir con los principios procesales establecidos en la norma, a fin de *lograr una pronta y eficaz solución del conflicto de intereses o de la incertidumbre jurídica presentada en cada caso.*(último párrafo del artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Civil)

### **1.3.2. Importancia del estudio.**

La importancia de la presente investigación radica en dar a conocer una posible solución al problema de retraso en los casos previsionales, esto es centrando principalmente en la protección del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva de los justiciables; en razón de la correcta aplicación del artículo 24 del D.S. N° 013-2008-JUS (Remisión de actuados administrativos).

Pues, es de verse en los procesos previsionales que el órgano jurisdiccional es muy flexible con la entidad administrativa al solicitar el expediente administrativo, siendo este acto, uno de los principales atrasos en los mencionados procesos, ya que los plazos otorgados por el juez adicionales al plazo legal, extiende el cumplimiento del mandato interpuesto.

A razón de lo expuesto, es necesario realizar una modificación en el mencionado artículo referente a la remisión de los actuados administrativos, a fin de reducir los plazos de espera del envío del expediente administrativo por parte de la entidad administrativa demandada, y con ello tener un desarrollo célere en los procesos previsionales.

## **1.4. Objetivos.**

### **1.4.1. Objetivo General.**

- Determinar si la dilación de los procesos contenciosos administrativos en materia previsional es debido a la incorrecta aplicación del artículo 24 del Texto Único Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo - D.S. N° 013-2008-JUS, por parte del órgano jurisdiccional.

### **1.4.2. Objetivos Específicos.**

- Analizar el rol que cumple el órgano jurisdiccional en la aplicación del derecho fundamental del Debido Proceso.
- Desarrollar la importancia de la remisión de actuados administrativos a los procesos

contenciosos en materia previsional y las consecuencias de su flexibilización procesal.

- Proponer la modificación del artículo 24 del Texto Único Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo - D.S. N° 013-2008-JUS.

### **1.5. Hipótesis.**

La modificación del artículo 24 del D.S. N° 013-2008-JUS, en el sentido que el Juez tendrá por apersonada a la demandada siempre que anexe el expediente administrativo a su contestación de demanda, evitaría dilación en el proceso y la vulneración de la Tutela Jurisdiccional Efectiva y el debido proceso.

### **1.6. Variables.**

#### **1.6.1. Variable independiente.**

Incorrecta aplicación del artículo 24 del D.S. N° 013-2008-JUS por parte del órgano jurisdiccional.

#### **1.6.2. Variable dependiente.**

Dilación de procesos previsionales.

### **1.7. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos.**

#### **1.7.1. Métodos.**

##### **1.7.1.1. Métodos generales.**

- **El Método Inductivo.-** La aplicación de este método nos permitió analizar el material de estudio, el mismo que sirvió de base para demostrar la hipótesis de trabajo, así como para la elaboración de las conclusiones y recomendaciones finales.
- **El Método Deductivo.-** Al emplear el método hipotético deductivo se pudo verificar su apoyo metodológico al momento de elaborar la hipótesis de trabajo, y en el transcurso de la investigación para la elaboración de un correcto estudio del tema

abordado desde comprender su naturaleza hasta llegar a sus manifestaciones específicas para casos concretos.

#### **1.7.1.2. Métodos específicos.**

- **El Método de la observación.-** Se utilizó la guía de observación, con la cual se logró prestar atención a la realidad socio jurídica que engloba el rol del Juez en la aplicación del artículo 24 del D.S. N° 013-2008-JUS, respecto a la remisión de los actuados administrativos que ha tenido como principal protagonista la resolución que declara la admisión de la demanda, esto es el auto admisorio.

#### **1.7.2. Técnicas.**

Las técnicas deben ser seleccionadas teniendo en cuenta lo que se investiga. Ejemplo:

- **Documentales.-** Se utilizaron fichas bibliográficas, fichas de investigación documental, fichas hemerográficas, etc., con lo cual se obtuvieron datos de los archivos de fuentes documentales, de textos que se hayan publicado en materia de Derecho Contencioso Administrativo, específicamente respecto a la remisión de los actuados administrativos, el rol de los jueces especializados en la materia previsional, así como de los conceptos de los medios probatorios necesarios en casos previsionales; además se revisó la norma civil, en cuanto a los deberes de los jueces y el trato otorgado a los derechos de Tutela Jurisdiccional Efectiva y del Debido Proceso; así como a los principios procesales, en especial el de celeridad, legalidad, economía procesal.
- **Observación.-** Se utilizó la guía de observación, con la cual se prestó atención a la realidad socio jurídica que engloba el rol del Juez en la aplicación del artículo 24 del D.S. N° 013-2008-JUS, respecto a la remisión de los actuados administrativos que tendrá como principal protagonista la resolución que declara la admisión de la demanda, esto es el auto admisorio.

### **1.7.3. Instrumentos.**

Los instrumentos son los medios auxiliares para recoger y registrar los datos obtenidos a través de las técnicas.

- **La Ficha.-** Este instrumento se utilizó en la técnica del fichaje, y sirvió para localizar las fuentes y también para almacenar la información que se obtuvo durante la investigación.
- **La Guía de Observación.-** Instrumento que se utilizó en la técnica de la observación, y sirvió para realizar una observación directa no participante del objeto materia de investigación.

## **CAPITULO II**

### **MARCO TEORICO**

#### **2.1. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y EL ÓRGANO JURISDICCIONAL EN LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA**

##### **PARTE I: LOS DERECHOS FUNDAMENTALES**

##### **2.1.1. TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA**

El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, se encuentra prescrita en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, que señala:

*“Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (...) 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional”.*

Así como en el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, cuando refiere:

*“Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso”.*

Y en el artículo 7° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que prescribe:

*“En el ejercicio y defensa de sus derechos, toda persona goza de la plena tutela jurisdiccional, con las garantías de un debido proceso”.*

A ello, existen diversos autores que opinan sobre el derecho de la tutela jurisdiccional efectiva, de los cuales mencionaremos al autor español Gonzales Pérez citado por MARTEL CHANG(2002), quien señala que el derecho a la tutela jurisdiccional es “El derecho de toda persona a que se le haga justicia; a que cuando pretenda algo de otra, esta pretensión sea atendida por un órgano jurisdiccional, a través de un proceso con garantías mínimas”(pág. 2).

Así mismo, el autor peruano Morales Godo citado por ORTIZ SANCHEZ(2014), conceptualiza a la tutela jurisdiccional efectiva como:

El derecho de todo sujeto de derecho de acceder al órgano jurisdiccional, de que sus peticiones sean atendidas a través de un proceso que reúna las garantías mínimas, tanto desde la perspectiva del demandante como del demandado, y que las pretensiones se hagan efectivas (demandante) o que se libere de ellas al demandado.(pág. 39)

Entendiéndose que, este derecho fundamental consiste, en el derecho que tiene toda persona, con la condición jurídica de demandante o demandado, según sea el caso, de recurrir al órgano jurisdiccional, a fin de obtener justicia con la convicción, que se utilicen todas las vías procesales adecuadas para la solución del conflicto de intereses o de la incertidumbre jurídica generada. Atendiendo además la *obtención de una respuesta definitiva y oportuna dentro de un plazo razonable*. (MENDOZA RAMIREZ, 2017, pág. 18)

Existen garantías y principios jurisdiccionales de la Tutela Jurisdiccional Efectiva, como Juez Natural, Acceso a la jurisdicción, Derecho a la instancia plural, Principio de igualdad procesal, Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y Deber judicial de producción de pruebas.

### **2.1.2. DEBIDO PROCESO**

El derecho al debido proceso como derecho fundamental, se encuentra estipulado en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, del cual señala, *Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (...) 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional*. Estableciendo además que, *Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación*.

Por lo que, el debido proceso es considerado como un principio-derecho, siendo con ello un instrumento de protección de los derechos fundamentales y de control del poder



que, al judicializarse la solución de las controversias de los ciudadanos, los jueces pueden interpretar y aplicar las normas sustantivas y procesales de conformidad con el debido proceso, para un correcto juicio y solución del problema.

A saber, lo anterior, el doctor TICONA POSTIGO(1999), cita a De Bernardis, quien sostiene que:

(...) el debido proceso es una garantía y un derecho fundamental de todos los justiciables que les permitirá, una vez ejercitado el derecho de acción..., acceder a un proceso que reúna los requisitos mínimos que lleven a la autoridad encargada de resolverlo a pronunciarse de manera justa, equitativa e imparcial. Es decir, aquellos elementos mínimos que resultan exigibles por los justiciables para que el proceso que se desarrolle -cualquiera que este sea- pueda permitirle acceder a la cuota mínima de justicia a la que este debe llevarle (...) (pág. 138)

En tanto, el debido proceso, al ser definido como derecho fundamental opta de un doble carácter, de cual resultará oponible a los poderes del Estado y a las personas jurídicas; teniendo un origen judicial, el cual se extenderá como debido procedimiento administrativo ante las entidades estatales, y como un debido proceso parlamentario, que se aplicará ante las cámaras legislativas y al interior de las instituciones privadas. (SAENZ DAVALOS, 1999)

Sin embargo, es de entender que al debido proceso se le considera como un derecho continente, pues comprende una serie de garantías formales y materiales que hacen al derecho del debido proceso, un derecho que es inherente a toda persona, dándole con ello el trato fundamental, siendo conscientes que el debido proceso se extiende a otras dimensiones a parte de lo judicial, esto es lo administrativo, lo arbitral, lo parlamentario, etc., pues en esencia asegura una correcta decisión, de acuerdo a las etapas y plazos que puedan constituirse en un proceso. (LANDA ARROYO C. , 2012)

Pues tal como se menciona en la Casación N° 1772-2010 – Lima, citado por el doctor LANDA ARROYO(2012):

[...] El debido proceso tiene por función asegurar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado, dando a toda persona la

posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela jurisdiccional de los derechos individuales a través de un procedimiento legal en el que se dé oportunidad razonable y suficiente de ser oído, de ejercer el derecho de defensa, de producir prueba y de obtener una sentencia que decida la causa dentro de un plazo preestablecido en la ley procesal [...] (pág. 10)

Por lo que, se puede definir al debido proceso, como un derecho fundamental inherente a toda persona, del cual le asegura el desarrollo eficiente de un proceso, que tendrá como fin un adecuado y correcto acceso a la justicia, en la razonabilidad y motivación de las decisiones de los órganos jurisdiccionales; es decir la observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso. (SENTENCIA DE LA SEGUNDA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA, 2013)

Existen derechos que integran el Debido Proceso, como el Derecho a la defensa, Derecho a probar, Derecho a la motivación de la sentencia, El derecho a la presunción de inocencia, Derecho de acceso a recursos y Derecho a la cosa juzgada.

### **2.1.3. DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA**

Para referir al derecho de la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso en los procesos contenciosos administrativos, es necesario mencionar que tales derechos los encontramos tanto en el trámite previo realizado entre el administrado y la administración, llamado procedimiento administrativo, que tiene como fin la solución de una incertidumbre administrativa entre ambas partes; como en el mismo proceso contencioso administrativo, llevado a cabo en vía judicial.

A ello, el Doctor ANACLETO GUERRERO(2016), hace hincapié de la justicia administrativa, citando al Doctor mexicano Fernández Ruiz Jorge, quien refiere:

En razón de la distinta índole de las controversias, (...) se ha producido (...) una diferenciación de los órganos de la aplicación de la normativa, cada uno con

procedimientos distintos, para dar paso a la justicia penal, la justicia civil, la justicia constitucional, la justicia laboral, la justicia electoral, la justicia fiscal y, desde luego, la justicia administrativa; esta última se desarrolla en dos vertientes: la sede administrativa y la sede jurisdiccional. La primera se imparte a través de órganos administrativos, (...) o como la propia Administración Pública mediante el recurso administrativo; la justicia administrativa en sede jurisdiccional se tramita en un tribunal administrativo o en un tribunal del Poder Judicial especializado en materia administrativa.(pág. 82)

Dicho lo anterior, conviene conceptualizar la justicia administrativa llevada a cabo en la propia administración, llamada en nuestra legislación como procedimiento administrativo, y aquella que se lleva a cabo ante las instancias judiciales, llamado proceso contencioso administrativo.

#### **2.1.3.1. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO**

Se define al procedimiento administrativo como la parte del derecho administrativo que estudia las reglas y principios que rigen la intervención de los interesados en la preparación e impugnación de la voluntad administrativa. (...) Estudia en particular la defensa de los interesados, y como lógica secuencia de ello la impugnación de los actos y procedimientos administrativos por parte de éstos; se ocupa pues de los recursos, reclamaciones y denuncias administrativas: Sus condiciones formales de procedencia, el trámite que debe dárseles, los problemas que su tramitación puede originar y cómo y por quién deben ser resueltos; pero no estudia cómo deben ser resueltos los problemas de fondo que dichos recursos, etc., puedan plantear, salvo que estén íntimamente ligados a un problema procedimental. (GORDILLO, 2012, págs. 325-326)

Es denominado en la legislación peruana como debido procedimiento administrativo, estipulado en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444<sup>1</sup>, del cual

---

<sup>1</sup>**Artículo IV.-Principios del procedimiento administrativo**

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (...)

Constituye un principio-derecho que concede a los administrados derechos y garantías implícitos a un procedimiento regular y justo. Este principio-derecho debe ser observado por la Administración Pública en la tramitación de los procedimientos administrativos que conduzcan a la creación, modificación o extinción de un derecho o la imposición de una obligación o sanción. (MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, 2013, pág. 15)

Aunando a lo anterior, el derecho del debido proceso surge también en sede administrativa, conforme lo explica el Profesor GUZMAN NAPURÍ (2001), teniendo un contenido que no está enfocado a todos los componentes de los que se le reconocen al que se da en sede judicial; pues, en primer lugar, no cabe hablar de cosa juzgada, sino tan solo de cosa decidida (...). Asimismo, no cabe necesariamente adoptar como elemento inherente al debido proceso en sede judicial la garantía de la instancia plural, dado que no toda entidad administrativa posee una instancia superior. (...) Existen, evidentemente, elementos comunes a ambos ámbitos de aplicación del derecho al debido proceso, sea el jurisdiccional o el administrativo. La doctrina y la jurisprudencia incluyen el derecho de defensa, el derecho a la presentación de pruebas, el derecho a que la entidad ante la cual se sustancia el proceso emplee necesariamente el procedimiento preestablecido por la ley, la motivación de resolución emitida, el derecho a un plazo razonable para la emisión de la resolución respectiva, entre otros.

Además, hace mención que el debido proceso en sede administrativa tiene ciertos elementos diferenciales. En primer lugar, la posibilidad de impugnar judicialmente la resolución emitida por la autoridad administrativa, posibilidad a la cual hemos hecho referencias líneas arriba. Asimismo, la naturaleza reglada del accionar administrativo genera un marco de acción más limitado respecto de la entidad estatal que el que poseen en general los órganos jurisdiccionales. (pág. 341)

---

**1.2. Principio del debido procedimiento.-** Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo

Así pues, a modo de conclusión, el derecho al debido proceso en sede administrativa resulta justificado con la condición que otorga el derecho al debido proceso en general, pues la falta de éste, implicaría arbitrariedades por parte de las entidades administrativas y en consecuencia vulneraría, aún más, los derechos fundamentales de las personas.

Sin embargo, a pesar que la ley prescribe el debido procedimiento administrativo como un principio que deben tener en cuenta las entidades administrativas en los procedimientos administrativos, los administrados alegan la vulneración de sus derechos, de los cuales al tener como pretensión principal la nulidad de una resolución administrativa, dan paso a un proceso contencioso administrativo, que se verá definido por los derechos de un debido proceso y de la tutela jurisdiccional efectiva que brinda un proceso judicial englobando derechos, garantías y principios para un eficiente desarrollo y correcta solución a los conflictos expuestos.

#### **2.1.3.2. PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**

Pasado el trámite administrativo, antes expuesto, el administrado tiene la oportunidad de reclamar el derecho negado por la administración ante instancias judiciales; del cual como lo menciona el Dr. Julio A. Fernández Cartagena, citado por el Dr. ANACLETO GUERRERO(2016):

(...) el proceso contencioso es el instrumento mediante el cual se despliega la función jurisdiccional del Estado no solo para revisar la legalidad del acto administrativo, sino también para que el administrado pueda plantear una pretensión solicitando tutela efectiva frente a la situación jurídica subjetiva que ha sido vulnerada o amenazada por la actuación administrativa.(pág. 86)

Señalando además que:

En el proceso administrativo se enfrentan dos partes. Por regla general, estos papeles están previamente asignados. El particular titular del derecho o interés legítimo lesionado por el acto o actuación administrativa, asume la carga de ser demandante y la administración, productora del acto o actuación recurrida, la más cómoda posición de demandada. (pág. 87)

Por lo que, el abogado argentino CASSAGNE(2011), señala lo referido por el autor González Pérez:

Tal como ha dicho González Pérez, “el derecho a la tutela judicial efectiva que se despliega, básicamente, en tres momentos diferentes del proceso (en el acceso a la jurisdicción, en el debido proceso y en la eficiencia de la sentencia) es, en definitiva, el derecho de toda persona a que se ‘haga justicia’, que se traduce, en el plano jurídico administrativo, en que siempre que crea que puede pretender algo con arreglo a Derecho frente a un ente público, tenga la seguridad de que su petición será atendida por unos órganos independientes y preparados” (págs. 153-154)

Asimismo, la autora LEDESMA NARVAEZ(2009), sostiene que:

Un elemento que contribuye a ese traslado de la discusión de sede administrativa a sede judicial es la búsqueda de la tutela de la jurisdicción, en atención a que las pretensiones contenciosas no están en función del acto administrativo ni tampoco están condicionadas al contenido de dicho acto. La intervención judicial no puede verse obstaculizada ni limitada por la administración. A ella se le brinda la oportunidad de pronunciarse previamente a que la jurisdicción haga su obra, ya sea para declarar la nulidad del acto o dar plena tutela cuando se vulnere o dañe intereses legítimos de los administrados.(pág. 174)

Pues además agrega:

El contencioso administrativo se configura como una manifestación más de la genérica función jurisdiccional que tiene como fin primordial tutelar situaciones jurídicas intersubjetivas, restablecimiento de la integridad de los derechos e intereses de los ciudadanos. La conexión entre el titular de uno de esos derechos e intereses y el proceso subsiguiente es la pretensión.(pág. 173)

Así también, la Jueza JIMÉNEZ VARGAS-MACHUCA(2012), señala:

(...) la Ley pone de relieve el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de los administrados, fundamentalmente a través de sus principios, mecanismos y la

noción de ser un proceso de “plena jurisdicción”, resaltando el control jurisdiccional pleno de los actos administrativos, el cual va más allá del control de legalidad, alcanzando un control que brinde una efectiva tutela a los derechos e intereses de los administrados. (pág. 23)

En tanto, el debido proceso en los procesos contenciosos administrativos refiere a la protección de los derechos fundamentales de las personas. Por lo que, actualmente se entiende que, para evitar la vulneración de tales derechos en los distintos procesos o procedimientos que se ventilan en la Administración Pública, es un deber estatal garantizar un marco de protección institucional que permita que las personas puedan ejercer adecuadamente sus derechos en cualquier vía procedimental. (MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, 2016, pág. 14)

Concluyendo que, se deja sentado la búsqueda de soluciones y justicia, en una vía judicial, de las personas que ven afectados sus derechos como administrados, del cual entra a tallar la búsqueda de una tutela o protección jurisdiccional que le asegure la revisión de sus intereses en un proceso judicial a cargo de un juez imparcial y justo, que utilizará todas las garantías procesales pertinentes para el desarrollo del proceso, colocando como prioridad, el derecho de tutela jurisdiccional efectiva y el derecho al debido proceso.

Por ello, de acuerdo al tema relevante de esta investigación en procesos contenciosos administrativos, existen casos de pensiones - o en su defecto procesos relacionados-, donde la Corte Suprema de Justicia de la República se ha pronunciado con respecto a los derechos de tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso, de los cuales se tiene lo señalado en el Cuarto Considerando de la Casación N° 6189-2011-Lima, esto es:

Que, en principio corresponde señalar que el derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva reconocidos también como principios de la función jurisdiccional en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, así como en el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, garantizan al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia dentro de los

estándares mínimos que su naturaleza impone; siendo ello así, mientras la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho al acceso a los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la resolución; el derecho al debido proceso en cambio significa la observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso, entre ellas, el de motivación de las resoluciones judiciales, recogido expresamente dada su importancia, en el inciso 5) del artículo 139 de la Constitución Política del Estado. [*subrayado es nuestro*](SENTENCIA DE LA SEGUNDA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA, 2013)

Entonces, la relación existente de ambos derechos es fundamental en la solución de los procesos judiciales, pues “(...) mientras la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho al acceso a los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia, es decir, una concepción genérica que encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder- deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio significa la observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso(...)”(SENTENCIA DE LA SEGUNDA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA, 2013, pág. 3)

Del cual, el mismo razonamiento, se impone en demás casaciones que tengan como análisis el derecho del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva; por lo que la concepción que se tiene de ambos derechos es clara para la resolución de los procesos contenciosos administrativos; señalando pues, que la vía judicial es originada por los administrados cuando sienten la vulneración de sus derechos, como el reclamo de pensiones de jubilación (tema relevante en esta investigación), y no tienen más que hacer frente a las decisiones otorgadas por una autoridad administrativa competente.



## PARTE II: EL ÓRGANO JURISDICCIONAL EN EL PERÚ

La estructura del Estado peruano contiene tres poderes principales en el desarrollo y armonía de la nación, como son el poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, previsto en la Constitución Política del Perú; del cual de acuerdo al tema presentado es preciso referir al Poder Judicial, mencionado en el Capítulo VIII de la Constitución Política, en donde se refiere en el artículo 138 “La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquico con arreglo a la Constitución y a las Leyes”, señalando como órganos jerárquicos aquellos que ejercerán la función jurisdiccional y judicial respectivamente, en beneficio de la ciudadanía.

Por ello, es conveniente mencionar a la JURISDICCION propiamente dicha, del cual proviene de la expresión latina *iuris dictio* que significa 'decir el Derecho' y alude a la función que asume el Estado, a través de los jueces y tribunales, de administrar la justicia, aplicando el Derecho a los casos concretos que se les presentan. En este sentido se habla también de función jurisdiccional y corresponde a los juzgados y tribunales determinados por las leyes.(PORTELLA NAVARRO, 2016)

Asimismo, cuenta con tres acepciones, esto es: **Como función**, se refiere a la actividad que lleva a cabo el Estado en aras de hacer efectiva la legislación sustantiva. **Como poder**, supone la atribución exclusiva y excluyente que tiene el Estado de solucionar válida y oficialmente todo conflicto de intereses, e impedir la realización de la justicia por mano propia. Así, la jurisdicción también es entendida como la potestad que tiene el Estado de aplicar el *ius puniendi* a aquel que haya infringido una norma. La constitución califica a la jurisdicción como Poder. **Como potestad**, implica el “poder de ejercicio obligatorio”, por parte de ciertos órganos del Estado, de aplicar el derecho objetivo a una controversia específica.(LAW ASSOCIATION WORLD, 2013)

De lo anterior, al reconocer que la jurisdicción es aquella actividad asumida por el Estado, a través de jueces y tribunales que tienen por fin solucionar conflictos de intereses de la ciudadanía aplicando el derecho objetivo, es necesario definir, lo que constituye un órgano jurisdiccional y la función jurisdiccional a cargo de estos.

#### 2.1.4. ÓRGANO JURISDICCIONAL

El termino Órgano Jurisdiccional, está referido a aquellos magistrados que cumplen función jurisdiccional en sentido estricto; es decir, a aquellos que únicamente desempeñan las labores propias de un juez (...). En la actualidad, debido a que el marco constitucional ha otorgado función jurisdiccional no solo a los magistrados del Poder Judicial, tenemos que la denominación “órgano jurisdiccional” se refiere tanto a los magistrados del Poder Judicial como también a los del Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la constitución, el cual únicamente se va a avocar al conocimiento de aquellos temas que constituyan atentados en contra de la norma fundamental; del Tribunal Militar, que se encarga de procesar y juzgar a aquellos militares o efectivos policiales que hayan cometido delitos de función; o del Jurado Nacional de Elecciones, en tanto desempeñen labor jurisdiccional en sentido amplio.(LAW ASSOCIATION WORLD, 2013)

La potestad jurisdiccional solo le compete al Poder Judicial del Estado Peruano y a cada uno de sus órganos encargados de la correcta administración de justicia; los cuales, están referidos en el artículo 26° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los mismos que lo conforman *la Corte Suprema de Justicia de la República, las Cortes Superiores de Justicia, en los respectivos Distritos Judiciales, los Juzgados Especializados y Mixtos, en las Provincias respectivas, los Juzgados de Paz Letrados, en la ciudad o población de su sede, y los Juzgados de Paz.*

Así pues, aquel poder emanado del estado, aplicado por órganos dedicados a la función de administrar justicia, es referido a la FUNCIÓN JURISDICCIONAL, la misma que constituye la actividad del estado subordinada al orden jurídico, productora de derechos, en los conflictos concretos o particulares que se le someten para comprobar la violación de una regla de derecho y adoptar la solución adecuada; realizado por los órganos antes mencionados, ordinarios o especiales, de la jurisdicción, y que se traduce en la aplicación del derecho por la vía del proceso. La finalidad del acto jurisdiccional es declarar imparcialmente el derecho en los casos controvertidos o de conflictos que son de su competencia.(PORTELLA NAVARRO, 2016)

Asimismo, el abogado PASACHE CÁRDENAS(2014), refiere a García Maynes, quien define la función jurisdiccional de la siguiente manera “(...) aplicación de normas jurídicas en casos concretos, aplicación que obliga a particulares y puede hacer efectiva aun contra su voluntad”. Mediante cuatro poderes los cuales son: Poder de decisión, Poder de Coerción, Poder de documentación y Poder de ejecución.

Así también el mismo autor citado menciona; se trata de una función pública:

(...) por cuanto es el Estado el que mediante los órganos y personas especialmente considerados aptos por la Ley para ejercerla la lleva a efecto. Por regla general ese órgano es el jurisdiccional, aun cuando, otros casos especiales que por cierto tienen a aumentar, la jurisdicción se radica en la cabeza de ramas del poder público diferente como la legislativa y la ejecutiva.

Por tanto, la función jurisdiccional es propia de los órganos jurisdiccionales, es decir los jueces, los mismos que tiene la misión de interpretar el derecho, señalando lo que es justo e injusto, haciendo con ello una distinción entre lo bueno y lo malo, aplicando las normas jurídicas vigentes a cada caso en concreto, a fin de impartir justicia a nombre del pueblo, teniendo presente los principios y derechos de la función jurisdiccional previstos en el artículo 139 de la Constitución Política del Perú, siendo estos:

***Artículo 139\*.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:***

***1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional.***

*No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral.*

*No hay proceso judicial por comisión o delegación.*

***2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.***

*Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el*

*procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno.*

*3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.*

*Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación.*

*4. La publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley.*

*Los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos, y por los delitos cometidos por medio de la prensa y los que se refieren a derechos fundamentales garantizados por la Constitución, son siempre públicos.*

*5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.*

*6. La pluralidad de la instancia*

*7. La indemnización, en la forma que determine la ley, por los errores judiciales en los procesos penales y por las detenciones arbitrarias, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar.*

*8. El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley.*

*En tal caso, deben aplicarse los principios generales del derecho y el derecho consuetudinario.*

*9. El principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que restrinjan derechos.*

*10. El principio de no ser penado sin proceso judicial.*

*11. La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes penales.*

*12. El principio de no ser condenado en ausencia.*

*13. La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. La amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa juzgada.*

*14. El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del*

*proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad.*

*15. El principio de que toda persona debe ser informada, inmediatamente y por escrito, de las causas o razones de su detención.*

*16. El principio de la gratuidad de la administración de justicia y de la defensa gratuita para las personas de escasos recursos; y para todos, en los casos que la ley señala*

*17. La participación popular en el nombramiento y en la revocación de magistrados, conforme a ley.*

*18. La obligación del Poder Ejecutivo de prestar la colaboración que en los procesos le sea requerida.*

*19. La prohibición de ejercer función judicial por quien no ha sido nombrado en la forma prevista por la Constitución o la ley. Los órganos jurisdiccionales no pueden darle posesión del cargo, bajo responsabilidad.*

*20. El principio del derecho de toda persona de formular análisis y críticas de las resoluciones y sentencias judiciales, con las limitaciones de ley*

*21. El derecho de los reclusos y sentenciados de ocupar establecimientos adecuados.*

*22. El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad.*

Por ende, siendo el JUEZ el referido órgano jurisdiccional, es la persona que tiene en sus manos la enorme responsabilidad de hacer justicia, en base de la convicción de la verdad real y objetiva apreciados en las pruebas aportadas al proceso, aplicando la norma pertinente al caso en conflicto, haciendo que sus resoluciones sean verdaderas ejecutorias creíbles, confiables, que no merezcan el cuestionamiento de los justiciables ni de la colectividad.(PALMA BARREDA, 2006, pág. 86)Esto quiere decir que el juez en el ejercicio de su función jurisdiccional aplica la ley, es decir, el juez es quien dice el derecho, no prescinde de la ley ni resuelve contra la ley.

Es así que, en el contexto nacional, el que administra justicia es el juez, quien, con su vocación de servicio a la sociedad proyecta el equilibrio de la paz social en justicia, cumpliendo su función pública jurisdiccional, teniendo obligaciones y derechos que la misma norma procesal civil se lo impone, los cuales serán mencionados más adelante.

### **2.1.5. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL Y LA APLICACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL PROCESO**

Nuestra Constitución Política del Perú, reconoce en su inciso 3 del artículo 139, la tutela jurisdiccional y el debido proceso como principios de la función jurisdiccional; quedando sentando que la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso, son derechos que tienen una fuerte vinculación en cada caso que se pretenda resolver, pues es bien sabido que en sede judicial, el Debido Proceso está contenido en el Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva, pues es con este segundo que cada persona acude a instancias judiciales hacer valer su derecho, de acuerdo a la posición de demandante o demandado en el proceso, en el cual a lo largo de su desarrollo deben de cumplirse las garantías y normas de orden público que deban aplicarse de acuerdo al caso y procedimientos existentes en el Derecho, dando con ello pie a un correcto debido proceso.

El juez (órgano jurisdiccional) es la persona encargada de dirigir e impulsar el proceso, siendo responsable de cualquier demora ocasionada por su negligencia, conforme lo señala el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Civil, respetando con ello los derechos de los justiciables y los principios establecidos en la legislación peruana.

Por ello, el Dr. TICONA POSTIGO(2007), señala que:

La Corte Suprema también ha reconocido al debido proceso como un derecho humano y fundamental que comporta un juzgamiento imparcial y justo con un mínimo de garantías procesales de jerarquía constitucional: “Que, en la doctrina se ha conceptuado el debido proceso o proceso justo como un derecho humano o fundamental que tiene toda persona por el sólo hecho de serlo, y que le faculta a exigir al Estado un juzgamiento imparcial y justo ante un Juez responsable,

competente e independiente, toda vez que el Estado no sólo está en el deber de proveer la prestación jurisdiccional a las partes o terceros legitimados, sino a proveerla bajo determinadas garantías mínimas que le aseguren tal juzgamiento imparcial y justo” [CAS. 2544-2005-JUNIN – Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema]. (pág. 46)

Entendiendo que, el derecho a un debido proceso faculta a toda persona a exigir al Estado un juzgamiento imparcial y justo por un Juez responsable, competente e independiente, promoviendo a su vez las garantías mínimas que aseguren la imparcialidad y justicia en el proceso; pues cada caso trata de hechos que deben ser resueltos por el juzgador, encontrándoles un sentido y un valor, con el fin de encontrar una solución adecuada al caso; brindando argumentos que van a justificar la decisión final debiendo ser razonable, socialmente aceptable y justa.

El principio del debido proceso contiene el derecho a la motivación escrita de las resoluciones que garantiza al justiciable el derecho de obtener finalmente una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones deducidas en su oportunidad por las partes en cualquier clase de procesos.

Asimismo, refiere Bardelli que:

El derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, reconocido en el artículo 139° inciso 3) de la Constitución, es el que tiene toda persona “a que se le haga justicia”, es decir, que cuando pretenda algo sea atendida por un órgano jurisdiccional mediante un proceso dotado de un conjunto de garantías mínimas. Como tal, constituye un derecho por decirlo de algún modo “genérico” que se descompone en un conjunto de derechos específicos enumerados, principalmente, en el mencionado artículo, o deducidos implícitamente de éste. Dentro de estos derechos cabe destacar, entre otros, el derecho a un juez independiente e imparcial.

La independencia y la imparcialidad del juez no sólo constituyen principios y garantías de la administración de justicia, sino también una garantía de quienes acuden a los órganos jurisdiccionales en busca de justicia. Al respecto, el TC

sostuvo en el fallo comentado: “Debe tomarse en cuenta que si bien, prima facie, la imparcialidad e independencia son garantías consustanciales y necesarias para una correcta administración de justicia, éstas han de entenderse, a su vez, como garantías para los imputados (garantía a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial), configurándose, de este modo, su doble dimensión” (BARDELLI LARTIRIGOYEN, 2015)

Es de señalar, además que, la tutela jurisdiccional efectiva tendrá el carácter de efectiva si el juez cuenta con la posibilidad de otorgar tutelas diferenciadas, así tendremos a un juez absolutamente activo y con posibilidades, por ejemplo, de dictar tutela preventiva no para reparar un perjuicio sino para evitarlo, prevenirlo o evitar su continuidad, a su vez contaremos con un juez capaz de anticipar lo que ha decidir en una sentencia con autoridad de cosa juzgada, también con la posibilidad de dictar medidas urgentes satisfactivas sin mayor trámite y solucionando problemas que no tengan una discusión adicional en el ámbito judicial, etc.; en suma un juez con estas herramientas hará que su actividad (servicio de justicia) sea satisfactoria y efectiva para los ciudadanos que recurren al Sistema de Justicia, en otras palabras tutela jurisdiccional realmente efectiva. (HURTADO REYES, pág. 461)

Con lo anterior, es de entender que el juez tiene la tarea de conocer a profundidad los derechos fundamentales antes mencionados para ser aplicados en cada proceso, pues tiene el poder conferido por el Estado para impartir justicia, debiendo estar vitalmente capacitado para ser un buen juez; otorgando la tutela jurisdiccional efectiva a los ciudadanos que buscan justicia y más aún cuando se aprecia la necesidad de la solución pronta del conflicto de intereses, dando prioridad a su vez, al debido proceso con el desarrollo correcto de los actos procesales.

#### **2.1.6. DEBERES Y DERECHOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL**

El juez en ejercicio de su función pública, y demás funciones al estar a cargo de un juzgado y de ser además director del proceso, la legislación peruana a través del Código Procesal Civil, le confiere deberes y derechos, los mismos que se encuentran desde el



artículo 50° al 53° de la mencionada norma, constituyendo ésta una norma complementaria al proceso contencioso administrativo.

De todos los deberes y derechos que se le otorga al juez para el correcto desarrollo de los procesos y asimismo la correcta dirección e impulso del mismo, para esta investigación nos centraremos en los primeros deberes estipulados en el artículo 50 del CPC, y además de las facultades coercitivas vistas en el artículo 53 del CPC; de los cuales son:

Los deberes, siendo las obligaciones que cumple el juez en el ejercicio de la función pública jurisdiccional, los señala el Art. 50 del Código Procesal Civil y son los siguientes:

Son deberes de los jueces en el proceso:

1. Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir su paralización y procurar la economía procesal;
2. Hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso, empleando las facultades que este Código les otorga;
3. Dictar las resoluciones y realizar los actos procesales en las fechas previstas y en el orden que ingresan al despacho, salvo prelación legal u otra causa justificada;
4. Decidir el conflicto de intereses o incertidumbre jurídica, incluso en los casos de vacío o defecto de la ley, situación en la cual aplicarán los principios generales del derecho, la doctrina y la jurisprudencia;
5. Sancionar al Abogado o a la parte que actúe en el proceso con dolo o fraude;
6. Fundamentar los autos y las sentencias, bajo sanción de nulidad, respetando los principios de jerarquía de las normas y el de congruencia.

El juez que inicia la audiencia de pruebas concluirá el proceso, salvo que fuera promovido o separado. El juez sustituto continuará el proceso, pero puede ordenar; en resolución debidamente motivada, que se repitan las audiencias, si lo considera indispensable.

Asimismo, aparte de otras facultades, ejercen aquellas que son COERCITIVAS determinadas en el artículo 53 del Código Procesal Civil, siendo estas con las que el

juez procura que las partes conserven una conducta procesal de respeto y consideración a toda la actividad judicial en el proceso, las cuales son:

En atención al fin promovido y buscado en el Artículo 52, el Juez puede:

1. Imponer multa compulsiva y progresiva destinada a que la parte o quien corresponda, cumpla sus mandatos con arreglo al contenido de su decisión. La multa es establecida discrecionalmente por el Juez dentro de los límites que fija este Código, pudiendo reajustarla o dejarla sin efecto si considera que la desobediencia ha tenido o tiene justificación; y
2. Disponer la detención hasta por veinticuatro horas de quien resiste su mandato sin justificación, produciendo agravio a la parte o a la majestad del servicio de justicia.

En atención a la importancia y urgencia de su mandato, el Juez decidirá la aplicación sucesiva, individual o conjunta de las sanciones reguladas en este Artículo.

Las sanciones se aplicarán sin perjuicio del cumplimiento del mandato.

Los derechos y deberes mencionados anteriormente, son indispensables debido a que el Juez necesita de estos para desarrollar y obtener un correcto proceso, pues con los principios señalados también en la legislación, y que serán mencionados a continuación, se dará el trámite adecuado de acuerdo a lo pretendido en el caso analizado.

#### **2.1.7. EL ROL DEL JUEZ EN LOS PROCESOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS**

El proceso contencioso administrativo, para ser instaurado en nuestro país, es preciso señalar la concepción europea, como lo señala el catedrático ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA(2004), del cual refiere que, en el escenario europeo continental, donde aparece el proceso contencioso administrativo, se generaron dos concepciones. La primera de ellas asume al contencioso-administrativo como el mecanismo mediante el cual en sede judicial se evaluaba la actuación de la administración. Estamos aquí ante el origen del denominado contencioso objetivo o de nulidad. (pág. 10)

Con ello, nos señala el autor, se buscaba que los jueces controlaran la actuación de una administración en ese momento dependiente básicamente del remanente del poder real todavía existente; sin embargo, en el cambio de épocas esta primera perspectiva se fue mediatizándose terminando en cuestionamientos, pues tales mecanismos no permitían el reconocimiento de situaciones jurídicas individualizadas, sino la anulación del acto impugnado.

Con lo desarrollado, se visualizó un proceso sujeto sólo a la declaración de nulidades de los actos que eran materia de impugnación; imponiéndose con ello un contencioso subjetivo o de plena jurisdicción. Pues, como señala el mencionado autor, en el contencioso-administrativo subjetivo de plena jurisdicción, el análisis jurisdiccional no se circunscribe a determinar si la Administración actuó conforme a Derecho o no, sino si en su quehacer respeta los derechos fundamentales de los administrados.(pág. 11)

Las anteriores perspectivas, tuvieron repercusiones en los países del mundo, y asimismo en nuestro país, del cual lo sucedido fue lo siguiente: tal como incluso lo demuestra lo originalmente previsto en el Código Procesal Civil de 1992, se manejaba una lógica de contencioso administrativo objetivo o de nulidad. Es recién con la puesta en vigencia de la ley 27584, materializada luego de la aprobación de la ley 27684, a partir del 17 de abril del año 2002, que en el Perú se instala un contencioso subjetivo o de plena jurisdicción. (pág. 11)

Es con el tiempo que el proceso contencioso-administrativo en el Perú, tendrá un nuevo modelo de plena jurisdicción, según comenta la autora MONZÓN VALENCIA DE ECHEVARRÍA(2011), donde se reducen los costos de la justicia, en tanto *el Juez no sólo controla el acto administrativo sino además se pronuncia sobre el fondo e inclusive ejecuta sus decisiones; con lo cual se logra proteger eficazmente los derechos de los administrados y principalmente, se da por concluida la controversia o incertidumbre jurídica iniciada en sede administrativa.* (pág. 35) Por tanto, se instituirá para resolver directamente los procesos que se resolvían en un entonces mediante Amparo, abordando de inmediato la capacitación y designación de jueces que serán especialistas en la materia contenciosa que tendrán como misión la revisión de la Ley 27584 para cada caso analizado.

La autora Mac Rae Thays (2012) refiere lo siguiente sobre la especialización de los órganos jurisdiccionales:

La Ley consagra la creación de juzgados de primera instancia y de salas especializadas en las cortes superiores de justicia, para buscar garantizar mayor efectividad en las técnicas de control jurisdiccional de la Administración Pública. Se establece que el proceso deberá iniciarse en todos los casos ante el juez especializado en la materia, cuyas resoluciones pueden apelarse ante la respectiva sala especializada de la Corte Superior. (...) Es evidente que debe tenderse a una especialización en lo contencioso-administrativo; lo ideal es generar órganos subespecializados según las materias objeto de revisión. La especialización, hoy, se da en la Corte Superior de Justicia de Lima y en la Corte Superior de Justicia del Cusco, en las que existen jueces especializados en lo contencioso-administrativo, y se espera que paulatinamente esto se vaya extendiendo.(pág. 57)

Para referir al rol del juez en los procesos contenciosos, es necesario realizar la interrogante que en su momento realizó la autora MONZÓN, esta es ¿Cuál es el rol del Juez en el proceso contencioso administrativo? Del cual obtuvo como respuesta:

- Ejercer control jurídico sobre las actuaciones de la Administración Pública sujetas a derecho administrativo.
- Ejercer efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados.

Refiriéndose a cada una de la siguiente manera:

**a) Control Jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo**

Cuando se habla de control jurídico, se refiere a la intervención del Poder Judicial sobre las actuaciones de la Administración Pública; esto es, al control que hará el Juez Contencioso Administrativo sobre el Acto Administrativo demandado, lo cual incluye control de legalidad y de constitucionalidad. En tanto, hay que tener en cuenta que sólo son objeto de este control jurídico, las

actuaciones públicas sujeto a derecho administrativo, llamado este un control externo que ejercen los jueces contenciosos administrativos sobre los actos administrativos demandados, después que hayan agotado la vía administrativa, previo procedimiento regular salvo aquellos casos exentos de dicho requisito; ya que, porque el control interno lo realiza la misma autoridad mediante los recursos administrativos o las nulidades de oficio.

**b) La efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados**

Esta segunda finalidad, constituye una remisión al inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú; del cual dicho principio es fundamental, ya que trasciende el hecho que dicho control jurídico tenga por misión ejercer efectiva tutela de los derechos e intereses de los Administrados, pues en sede administrativa, se cuenta con el principio de autotutela, lo que puede representar un desequilibrio con el administrado. Es preciso tener presente que la tutela involucra el derecho fundamental de acudir a un órgano jurisdiccional a fin de formular sus incertidumbres y/o controversias jurídicas en orden de lograr justicia; y por otro lado la efectividad es aquella con la que debe ser atendida las pretensiones, el cual debe pensarse en la celeridad procesal, y demás mecanismos judiciales durante el proceso, necesarios para lograr la efectiva tutela y la emisión de un pronunciamiento de fondo como al ejecutar la sentencia.

Entendiéndose que el juez debe ser un muy buen conocedor de las leyes contencioso administrativas instauradas en la legislación peruana, con el único fin de garantizar la efectividad de protección de los derechos de los administrados y, a su vez de la administración, para obtener un debido proceso judicial con miras a atender las incertidumbres o conflictos de intereses que se discutan en cada proceso administrativo ventilado ante un juzgado.

Es por esto que, cada persona que decide asumir el rol de juez en materia contencioso administrativa, debe tener una buena preparación normativa, moral y social; pues juegan como papeles importantes derechos fundamentales, como se vienen mencionando desde

el inicio de esta investigación, además de principios propios del proceso contencioso administrativo que son complementados con la normativa civil y que serán desarrollados de manera concisa, en el siguiente apartado, ya que tiene un grado de importancia en el presente tema.

La Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, en su artículo 2° menciona: El proceso contencioso administrativo se rige por los principios que se enumeran a continuación y por los del derecho procesal, sin perjuicio de la aplicación supletoria de los principios del derecho procesal civil en los casos en que sea compatible; confirmándose con ello la complementariedad de los principios, mencionada líneas arriba, que tiene el proceso contencioso administrativo con la normativa civil. Del cual para el desarrollo de los mismos se tendrá como referencia lo mencionado por el abogado HUAMAN ORDOÑEZ. (2016)

### **2.1.8. PRINCIPIOS DEL PROCESO CIVIL. EXPLICACIÓN RESPECTO DEL PROCESO DE LA LPCA**

#### **2.1.8.1. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva**

El CPC como norma del proceso civil cuyas reglas se aplican a todos los procesos, incluido el de la LPCA, expone que toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso. Respecto del proceso de la LPCA, materia de interés, podemos ver que la tutela jurisdiccional efectiva se conecta con el principio de la igualdad procesal del artículo 2.2 de la norma procesal de justicia administrativa, del cual toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, es decir tanto administrado como entidad administrativa, partes del proceso contencioso administrativo, tienen inherentes el mencionado derecho, el mismo que deberá ser protegido por el juez. (págs. 64-68)

#### **2.1.8.2. Principios de dirección e impulso del proceso**

Este principio viene determinado por el artículo II del Título Preliminar del CPC. En él

se dice que la dirección del proceso está a cargo de juez, quien la ejerce de acuerdo a lo dispuesto en el CPC. El juez debe impulsar el proceso por sí mismo, siendo responsable de cualquier demora ocasionada por su negligencia. La conexión de estos principios, se afirma en el sistema procesal publicístico, esto es donde el ámbito de las partes procesales se reduce para dar paso a un juez, director del proceso, va en directo por ello al principio de favorecimiento del proceso como de suplencia oficiosa, presentes en el proceso de la LPCA. (pág. 69)

#### **2.1.8.3. Los fines del proceso e integración de la norma procesal**

Todo proceso, inclusive el proceso de la LPCA, asume como fin la resolución de conflictos o diferencias jurídicas, finalidad que atiende no solo a lo jurídico sino igualmente a lo social. Por esto, el juez deberá atender la finalidad concreta del proceso, referido a resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre.

Al efectuar una comparación con el principio de integración del artículo 2,1 de la LPCA, resulta más completa pues dicha norma ordena al juez la aplicación de los principios del Derecho Administrativo; en tanto que el Código Procesal en lo civil, además de la invocación de los principios generales del Derecho, precisa la remisión de la doctrina y jurisprudencia. (págs. 69-70)

#### **2.1.8.4. Los principios de iniciativa de parte y conducta procesal**

Estos principios están recogidos en el artículo IV del Título Preliminar del CPC, del cual el proceso se promueve sólo a iniciativa de parte, la que invocará interés y legitimidad para obrar. El primero, en lo procesal, se identifica con el interés particular para la activación del poder jurisdiccional y la legitimidad para obrar, es la equivalencia entre los que acuden al órgano jurisdiccional y aquellos con los que se inició la diferencia, de allí que se habla de una relación jurídica material como paso a la relación jurídica procesal, desde la cual los sujetos implicados en ellas deben ser los mismos.

En el contencioso administrativo, la legitimidad para obrar viene signada con la identificación del ciudadano y además con las Administraciones Públicas. Podrán ser, en consecuencia, demandantes tanto a los particulares como los poderes públicos, y

demandados los entes públicos u ocasionalmente dichos poderes estatales y el particular al tratarse de un procedimiento administrativo trilateral.

En el proceso de la LPCA como en el civil, el juez tiene el deber de impedir y sancionar cualquier conducta ilícita y dilatoria, más que en la mayoría de procesos contra el Estado, el acto viene escudado del privilegio de la presunción de validez, ejecutividad y ejecutoriedad, categoría que se impone sobre el administrado. (págs. 70-73)

#### **2.1.8.5. Principios de inmediación, concentración, economía y celeridad procesal**

La inmediación como principio procesal impone al juzgador un acercamiento con las partes. En el proceso de justicia administrativa el acercamiento aludido es constante dado el abismal poder de las administraciones públicas frente a los derechos subjetivos e intereses legítimos que es lo único que puede exhibir el particular. Por esto, las audiencias y la actuación de medios probatorios se realizan ante el juez, siendo indelegables bajo sanción de nulidad. El proceso, además, se realiza procurando que su desarrollo ocurra en el menor número de actos procesales, buscándose de tal manera la concentración de los mismos. De la misma forma, el juez dirige el proceso tendiendo a una reducción de los actos procesales, sin afectar el carácter imperativo de las actuaciones que lo requieran, con lo cual se busca la economía en el proceso.

Finalmente, la celeridad radica en que la actividad procesal se realiza diligentemente y dentro de los plazos establecidos, debiendo el Juez, a través de los auxiliares bajo su dirección, tomar las medidas necesarias para lograr una pronta y eficaz solución del conflicto de intereses o incertidumbre jurídica.

Siendo exigibles todos estos principios en los procesos contencioso administrativos, pues depende de estos para obtener un proceso encaminado en un juez justo e imparcial, además de obtener una pronta decisión de acuerdo a las actuaciones procesales tramitadas en cada proceso, dando pie a una certera economía que beneficiaría en parte al administrado. (pág. 73)



#### **2.1.8.6. La socialización del proceso. La búsqueda de la igualdad procesal.**

El Juez como director del proceso tiene voz y voto pleno para evitar cualquier ápice de desigualdad entre los sujetos implicados en el proceso, a partir de allí le viene impuesto al igual que a todas las Administraciones Públicas, la igualdad ante la Ley y dentro de ella, la igualdad en la aplicación de la Ley.

En la socialización procesal de la LPCA, se asoman sujetos diferentes, marcados desde un procedimiento administrativo por la especial relación de sujeción presente en la relación jurídica administrado-poderes estatales.

Así, la igualdad procesal, se va ganando palmo a palmo por el particular conforme avanza el proceso de la LPCA. Entonces, el juzgador del proceso contencioso administrativo tiene por objeto que en la escena procesal no haya más administrados ni mucho menos Administraciones Públicas; con toda simplicidad, busca que en el proceso solo existan justiciables: demandantes y demandados, solo ello y nada más. (págs. 74-76)

#### **2.1.8.7. El *iura novit curia*: Juez y Derecho**

El Juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes.

En lo contencioso administrativo, la exigencia del *iura novit curia* admite que el juez usando sus poderes, pueda dar una respuesta judicial congruente. (págs. 76-77)

#### **2.1.8.8. Los principios de vinculación y formalidad**

Las normas procesales contenidas en el CPC son de carácter imperativo; sin embargo, el Juez adecuará su exigencia al logro de los fines del proceso. En lo que respecta al proceso de la LPCA, la aludida inflexión no es rigurosa dado que el proceso de justicia administrativa ha sido esbozado *pro homine*, esto es a favor del ciudadano y de la misma manera, *pro actione*, en auspicio del proceso. Respetando, asimismo, lo

establecido en la norma, concordante con la jurisprudencia o precedentes vinculantes que se pudieran tener en cada caso analizado. (págs. 77-79)

#### **2.1.8.9. El principio de doble instancia**

La norma procesal civil prescribe que el proceso tiene dos instancias, salvo disposición legal distinta. El grado de doble jurisdicción es el fundamento de recurrir razonablemente las resoluciones ante las instancias superiores de revisión final. El derecho a la instancia plural es garantía consustancial del derecho al debido proceso donde se ampara el derecho del ciudadano a un doble pronunciamiento en lo jurisdiccional que quizás, en un procedimiento administrativo no hubiese podido ser posible ya que en la función administrativa no existe la seguridad de dicha doble instancia. (págs. 79-81)

### **2.1.9. PRINCIPIOS DE LA LEY DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**

El artículo 2 de la LPCA refiere a los principios que estructuran el proceso en mención, rigiéndose el Proceso contencioso administrativo por los principios dados en la ley y por los del derecho procesal y derecho procesal civil; de los cuales se han cogido a cuatro de ellos que brindan al proceso mismo, una direccionalidad a favor del ciudadano, pues la situación de autotutela que tiene la administración pública hace que el ciudadano entre en desventaja cuando surge discrepancia entre ambas partes; por lo que se ha previsto de principios que por su naturaleza presenten mayor nivel de incidencia dentro del proceso contencioso administrativo. Regulándose el principio de integración, igualdad procesal, principio de favorecimiento del proceso y principio de suplencia de oficio.

#### **2.1.9.1. Principio de integración**

Refiere que los jueces no deben dejar de resolver el conflicto de intereses o la incertidumbre con relevancia jurídica por defecto o deficiencia de la ley, aplicando en tales casos los principios del derecho administrativo, pues se determina la obligación del juzgador en desempeñar una labor completa, ya que, si las partes aportan los hechos,

cabe que el juez aporte el derecho si el mismo ha sido indebidamente invocado o no lo ha sido.

Impone, a su vez, que el juzgador brinde tutela judicial efectiva, ofreciendo la justicia solicitada por los ciudadanos. Recoge también este artículo, el principio de iura novit curia, es decir que el Tribunal conoce el Derecho, esto es que la labor del Juez como operador del Derecho, en lo referido a su interpretación y aplicación exhaustiva y completa; y ante un vacío legal se aplicará, como la norma en cuestión afirma, los principios procesales que informan el sistema jurídico.

#### **2.1.9.2. El principio de igualdad procesal**

Este principio exige una paridad entre el demandante y el demandado; entonces, el principio de igual procesal desde el cual se alega que las partes en el proceso contencioso administrativo deberán ser tratadas con igualdad, independientemente de su condición de entidad pública o administrado, no es en sí, un mandato directo de igualdad; sino es un mandato programático al interior del proceso mismo.

#### **2.1.9.3. El principio de favorecimiento del proceso**

Busca satisfacer la urgencia que demanda la tutela inmediata jurisdiccional ante un acto lesivo a los derechos e intereses de los administrados, bajo un criterio de razonabilidad. Si el ciudadano se encuentra dentro del proceso de la LPCA, entra a tallar la regulación que está a favor del ciudadano, esto es pro homine desde donde las reglas previas al ascenso al proceso judicial no sean inflexibles sino que permitan, ante normas legales que no pueden hacer ver al ciudadano cuando no es más necesario acceder a la última decisión administrativa, acudir al poder jurisdiccional.

#### **2.1.9.4. Principio de suplencia de oficio**

El juez deberá suplir las deficiencias formales en las que incurran las partes, son perjuicio de disponer la subsanación de las mismas en un plazo razonable en los casos en que no sea posible suplir de oficio tales suplencias. Aquí se enarbola el sistema procesal publicístico, a través del cual el juzgador es quien dirige el proceso, por lo que, ante deficiencias de forma, éstas serán corregidas a fin de dotar de dinamicidad el decurso procesal.

De todos los principios mencionados, son de relevancia para este tema de investigación, aquel que refiere al derecho de la tutela jurisdiccional efectiva, pues con ello expone el derecho de toda persona para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, conectándose con el principio de la igualdad procesal del artículo 2.2 de la norma procesal de justicia administrativa; asimismo el referido a la dirección e impulso del proceso, pues involucra principalmente al Juez dentro de un proceso, pues es el responsable de cualquier demora ocasionada por su negligencia, teniendo conexión con el principio de favorecimiento del proceso como de suplencia oficiosa, presentes en el proceso de la LPCA.

Así también, el referido a los fines del proceso e integración de la norma procesal, pues el juez deberá atender la finalidad concreta del proceso, referido a resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre; no dejando de lado el principio de iniciativa de parte y lo más importante la conducta procesal de ambas partes procesales; pues está determinando que en el proceso de la LPCA como en el civil, el juez tiene el deber de impedir y sancionar cualquier conducta ilícita y dilatoria, más que en la mayoría de procesos contra el Estado, el acto viene escudado del privilegio de la presunción de validez, ejecutividad y ejecutoriedad, categoría que se impone sobre el administrado.

Y así mismo los principios de inmediación, economía y celeridad procesal, ya que la inmediación impone al juzgador un acercamiento con las partes. La economía procesal procura que el desarrollo del proceso ocurra en el menor número de actos procesales, buscando con ello la celeridad procesal y de esta manera la actividad procesal se realice dentro de los plazos establecidos, debiendo el Juez, tomar las medidas necesarias para lograr una pronta y eficaz solución del conflicto de intereses o incertidumbre jurídica. (págs. 82-98)

## **2.2. EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**

### **2.2.1. ASPECTOS GENERALES**

La regulación del Proceso Contencioso Administrativo data a inicios del siglo XX, donde se consideraba la posibilidad de contar con un proceso especial que resolviera las controversias en materias administrativas, cuestionando judicialmente los actos realizados por la administración pública. Sin embargo, el anterior designio no fue acogido por la Constitución de 1933, incorporando como un proceso de control judicial de las normas reglamentarias, a la “acción popular”; del cual, con la Constitución de 1979 se creó en el Perú el proceso de Amparo destinado a la tutela de los derechos fundamentales cuando “sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad, funcionario o persona”, conservando la acción popular y también las acciones contencioso-administrativas.

En 1991, en la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, se establecieron reglas para los denominados Procesos Contenciosos-Administrativos, los que fueron derogados en 1993 al aprobarse el nuevo Código Procesal Civil para que se incluyera estos procesos bajo el título de “impugnación de acto o resolución administrativa”, como modalidad de procesos abreviados, del cual sólo se controlaría la legalidad del acto, sin pronunciamiento sobre el fondo de la decisión administrativa, limitando la Tutela jurisdiccional de los particulares que acudían al proceso.

Ya en la Constitución de 1993, se consagró la denominada “acción contenciosa – administrativa” en el artículo 148°, del cual refiere: “Las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la acción contenciosa – administrativa.”, entendiéndose que se estableció con ello un medio para llevar a cabo un control jurisdiccional de las actuaciones administrativas que perjudicaban los intereses y derechos de los ciudadanos. Pero, hasta ello, la idea de un Contencioso Administrativo de nulidad, era sólo un mecanismo de control de la actuación de la administración y reconocer la nulidad de un acto administrativo; por lo que, tal percepción y finalidad fue cambiada con la aprobación de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo (LPCA)- Ley N° 27584, publicada el 07 de diciembre del

2001, en el diario Oficial “El Peruano”.

A ello, la Ley 27584, se presentó como la formación de ideas distintas, con dirección a establecer si las entidades administrativas respetan los derechos fundamentales de los administrados, del cual como lo señala la Jueza JIMÉNEZ VARGAS-MACHUCA(2012):

(...) la Ley pone de relieve el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de los administrados, fundamentalmente a través de sus principios, mecanismos y la noción de ser un proceso de “plena jurisdicción”, resaltando el control jurisdiccional pleno de los actos administrativos, el cual va más allá del control de legalidad, alcanzando un control que brinde una efectiva tutela a los derechos e intereses de los administrados.(pág. 23)

Luego de la promulgación y vigencia de la mencionada Ley, existieron casos destacados, en la que el Tribunal Constitucional Peruano como principal mediador ha tenido que participar como ente revisor de procesos constitucionales, con el fin de que éstos tengan el trato expuesto en un proceso contencioso administrativo, adquiriendo con ello la relevancia procesal esperada, rescatando de ello las sentencias emitidas en los casos “Manuel Anicama Hernández” (STC N° 1417-2005-AA/TC), “Maximiliano Villanueva Valverde” (STC N° 0168-2005-PC/TC) y “César Baylón Flores” (STC N° 0206-2005-PA/TC), los que sirvieron para evidenciar las deficiencias incurridas en la Ley 27584, del cual el gobierno peruano aprobó el Decreto Legislativo N° 1067, el veintisiete de junio de dos mil ocho, introduciendo importantes modificaciones como lo señala el Segundo Párrafo del Considerando<sup>2</sup> de la ley 27584, sin embargo la magnitud de los cambios recogidos pronto hizo necesario pasar al dictado de un Texto Único Ordenado mediante el Decreto Supremo 013-2008-JUS, publicado el 29 de agosto del 2008, el cual introdujo valiosas e importantes modificaciones a la regulación anteriormente vigente y que acercaron mucho más al contencioso peruano a su reclamado carácter de plena jurisdicción.

---

<sup>2</sup>Que, entre las normas mencionadas, se encuentra el Decreto Legislativo N° 1067, Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 27584, Ley que regula el proceso contencioso administrativo, que modificó e incorporó varios artículos a la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo

Así, como lo refiere el abogado HUAMÁN ORDOÑEZ(2016), el proceso de la LPCA es un proceso subjetivo, dedicado a la protección de los derechos fundamentales de los administrativos, de los justiciables; en fin último, de los ciudadanos. (...) El proceso de justicia administrativa es con precisión uno de los mecanismos que permiten el aseguramiento de las condiciones de coexistencia pacífica en la sociedad puesto que la presencia de un conflicto y su eventual no solución entre los particulares y nuestras Administraciones Públicas ponen en jaque, por más pequeño que éste sea, al mismo Estado y a la sociedad. (pág. 53 y 55)

Por ello se entiende que la justicia administrativa, tiene por fin el balance de los derechos fundamentales alegados por el ciudadano y asimismo los bienes jurídicos de las entidades de la administración, frente a la manifestación del interés público; asegurando con ello una sociedad pacífica.

### **2.2.2. NATURALEZA JURÍDICA**

Para PRIORI POSADA(2009), el Proceso Contencioso Administrativo predica un control jurisdiccional pleno de los actos administrativos que no se restringe a su solo control de legalidad, sino a un control que supone brindar una efectiva tutela a los derechos e intereses de los administrados.(pág. 461)

Aunando lo anterior y para mayor entendimiento, se cita a CORONADO YABAR(2018), quien señala:

(...) podemos sostener que la naturaleza jurídica debe de ser vista de acuerdo a dos criterios: (...) De acuerdo a la rama que más se relaciona, se debe de tener en cuenta que el proceso contencioso administrativo busca solucionar controversias entre el administrado y la administración pública. Como una primera idea podemos decir que el procedimiento no existiría sino hubiesen conflictos entre la administración y quienes va destinado el servicio, por lo que el proceso contencioso administrativo cumple una función auxiliar respecto a esta. Respecto a las demás ramas de derecho existen dos tipos de disciplinas jurídicas, unas disciplinas llamadas sustantivas y otras llamadas adjetivas; de las

cuales las primeras se relacionan con la prescripción de comportamientos a las personas por parte del Estado que imponen deberes y derechos; y las segundas prescriben la forma en la que las personas pueden hacer valer dicho derecho ante un tribunal. Entendiendo además que el Proceso Contencioso Administrativo es de carácter subsidiario respecto a las otras ramas de derecho sustantivo, ya que necesita de estas para poder actuar. Si no existiera el Derecho Administrativo, no habría razón de existir de una rama procesal que ayude a la solución de conflictos administrativos. Sin embargo, ello no nos debe de llevar a considerar que el Proceso Contencioso Administrativo se halla supeditado al Proceso Civil, del cual goza plena independencia y autonomía conceptual, ya que ambos persiguen objetivos distintos.

### **2.2.3. LAS PARTES EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**

Para la noción de parte en un proceso, HUAMAN ORDOÑEZ, refiere que el proceso en la búsqueda de satisfacción de justicia del caso concreto y de paz social en justicia, involucra a diversos autores de los cuales el Juez y las partes cobran verdadero realce; citando a Matheus López, quien concibe a la parte como “el sujeto o sujetos cuya actividad se desenvuelve al interior del proceso”; añadiendo además que “la cualidad de parte se adquiere por el solo hecho de la interposición de una demanda ante el juez: La persona que propone la demanda, y la persona contra quien se la propone, adquieren sin más, la calidad de partes del proceso; pues basta ella para que surja la relación procesal”

Siendo acertada tal definición, el mencionado autor refiere que, en el proceso contencioso administrativo, las partes se encuentran en la identificación del administrado y de las entidades administrativas, esto es las Administraciones Públicas. De un lado, el administrado, busca la satisfacción subjetiva respecto de sus derechos e intereses legítimos; de la otra, ubicamos a los órganos de la Administración, cuya actuación se encuentra sometida a fiscalización por el juzgador de lo contencioso administrativo.



La noción de parte, refiere, involucra la capacidad para ser parte y la capacidad procesal; definiendo la primera como la aptitud para ostentar la titularidad de situaciones jurídico-procesales; mientras que la segunda, la capacidad de una persona para comparecer en un proceso por sí mismo o para conferir representación designando apoderado judicial.

Quedando claro que en el proceso contencioso administrativo actúan como partes procesales, una o varias personas frente a una administración pública o privada, del cual, en un principio, esto es en vía administrativa, tomaron el rol de administrado y autoridad administrativa conforme lo señala el artículo 59° de la Ley 27444-Ley de Procedimiento Administrativo General. Pero que, en vía judicial, serán demandante y demandado buscando con ello el principio de igualdad procesal referido líneas arriba.

Es referente mencionar al doctor ANACLETO GUERRERO(2016) quien explica sobre las partes concurrentes en el proceso administrativo, citando a García Gil, quien menciona que parte actora o recurrente es, por lo general, el particular (también, menos frecuente, otra administración) que ejercita la pretensión, y parte demandada o recurrida la Administración contra cuya actuación se dirige el recurso.

Asimismo, refiere que son partes en el proceso contencioso administrativo, la administración pública y los administrados. Los administrados para ser parte en el proceso obligatoriamente requieren de capacidad de obrar y estar legitimados para intervenir en el proceso. Por lo que, como condiciones para ser parte, el doctor precisa, la capacidad procesal, interés para obrar y legitimación para obrar.

De esto, el artículo 12° al 17° del TUO de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo – D.S. N° 013-2008-JUS, refiere a las partes del proceso en cuanto a la legitimidad para obrar activa, pasiva, la intervención del Ministerio Público y la representación y defensa de las entidades administrativas. Así también, es importante hacer mención que de acuerdo al tema tratado en esta investigación, las partes en el proceso contencioso que tiene como materia las pretensiones previsionales, como parte demandante se tendrá a personas mayores de edad, esto es personas mayores de 65 años de edad, a quienes se tendrá que brindar un trato preferencial debido a las diversas

circunstancias que puedan ocurrir en la etapa de vida, del cual se hablará de ello más adelante; y así mismo como demandado actuará la Oficina de Normalización Previsional – ONP, que cumple en estos procesos el rol de entidad administrativa demandada, de quien se mencionará posteriormente.

#### **2.2.4. LA PRUEBA EN EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**

##### **2.2.4.1. PRUEBA**

Para desarrollar sobre la prueba en el proceso contencioso administrativo, en específico, es preciso citar a autores que tienen una concepción clara con respecto a la palabra prueba mencionada en el Derecho de manera general, como así lo refiere ROJAS PERALTA(2009), pues nos dice que la prueba constituye una de las principales actividades a desarrollarse en el proceso. En este sentido, las meras afirmaciones carecen de plena eficacia en el proceso si no se encuentran sustentadas con medios de prueba que las corroboren, y que permitirán al Juez arribar a la convicción necesaria sobre la fundabilidad o no de las pretensiones propuestas por las partes. Señalando además que cumple como funciones: **a)** Fija los hechos materia de la controversia, **b)** Permite el convencimiento del Juez y **c)** Genera certeza acerca de las afirmaciones y alegaciones de los sujetos procesales.

Asimismo, tiene tres acepciones en el campo del Derecho, según el profesor chileno ORREGO ACUÑA(2016), quien afirma:

- a) Alude a la demonstración de la verdad de un hecho, de su existencia o inexistencia. Es el establecimiento, por los medios legales, de la exactitud de un hecho que sirve de fundamento a un derecho que se reclama. b) Se refiere a los medios de prueba, o sea, los medios de convicción, considerados en sí mismos. c) Se habla de la prueba para referirse al hecho mismo de su producción, a la circunstancia de hacerla valer ante los tribunales. En este sentido, por ejemplo, se dice que la prueba incumbe al actor o al demandado.(pág. 1)

Por tanto, la prueba es un instrumento importante dentro de un proceso, pues con ella se corrobora lo expresado por las partes, quienes están en conflicto, y que además permite

al Juez un acercamiento a la realidad mencionada en el desarrollo del proceso. Asimismo, la prueba sugiere ser los medios que convencerá a los tribunales sobre la verdad de un hecho.

#### **2.2.4.2. DERECHO A PROBAR**

En el proceso contencioso administrativo, los hechos que deben probarse son aquellos que cada parte ha consignado en los escritos de demanda, contestación y alegaciones complementarias relacionados al conflicto inmerso en un determinado caso. Por lo que probar, es un derecho inherente a cada persona que es parte de un proceso, siendo una expresión del derecho de defensa y por consiguiente al derecho a un debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva. Por lo que, la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, en la Casación N° 6961-2009-La Libertad(2011), menciona en su Quinto Considerando:

Que, cabe indicar que el derecho a probar es un derecho complejo debido a que su contenido se encuentra integrado de los siguientes derechos: (...) 1° El derecho a ofrecer los medios probatorios destinados a acreditar la existencia o inexistencia de los hechos que son objeto concreto de prueba; 2° El derecho a que se admitan los medios probatorios así ofrecidos; 3° El derecho a que se actúen adecuadamente los medios probatorios admitidos y los que han sido incorporados de oficio por el juzgador; 4° El derecho a que se asegure la producción o conservación de la prueba a través de la actuación anticipada y adecuada de los medios probatorios; 5° El derecho a que se valoren en forma adecuada y motivada los medios de prueba que han sido actuados y que han ingresado al proceso o procedimiento. (...) (pág. 3)

De acuerdo a lo anterior, el derecho a probar supone el derecho a ofrecer medios probatorios, entendiendo esto como el vehículo a través del cual se va probar algo, debiendo referir a los hechos y a la costumbre cuando sustenta la pretensión; un instrumento que es incorporado al proceso con cierta información sobre sucesos que han ocurrido en la realidad, con lo cual se busca justificar la verdad de una determinada afirmación sobre un hecho.

Estos medios probatorios, conforme nos señala el artículo 31 del TUO de la LPCA – DS N° 013-2008-JUS, deberán ser ofrecidos por las partes en los actos postulatorios, acompañándose todos los documentos y pliegos interrogatorios. Asimismo, dice que se admitirán excepcionalmente medios probatorios extemporáneos, cuando estén referidos los hechos recurridos o conocidos con posterioridad al inicio del proceso, vinculados directamente a las pretensiones postuladas.

De ello la autora MONZON, refiere que los medios probatorios serán admitidos, siempre que sean presentados en los actos postulatorios; es decir, en la demanda o en la contestación. Conteniendo como excepción la incorporación de pruebas extemporáneas, siempre que cumplan con tres requisitos, estos son: 1° vincularse directamente a las pretensiones postuladas, 2° se refieran a hechos ocurridos o conocidos, después de haber iniciado el proceso y 3° se ponga a conocimiento de la parte contraria, durante tres días. (pág. 281)

#### **2.2.4.3. ACTIVIDAD PROBATORIA**

En el proceso contencioso administrativo, la actividad probatoria se restringe a las actuaciones recogidas en el procedimiento administrativo, salvo que se produzcan nuevos hechos o que se trate de hechos que hayan sido conocidos con posterioridad al inicio del proceso. En cualquiera de estos supuestos, podrá acompañarse los respectivos medios probatorios, según así nos refiere el artículo 30 del TUO de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo - DS N° 013-2008-JUS.

Para centrar mejor la idea anterior, es de entender que en un primer momento no se aceptaba la introducción de nuevos hechos después de iniciado el proceso, dando con ello prioridad a la autotutela que tiene la administración pública, dejando en un tanto de indefensión al administrado; por lo que al modificarse la ley 27584 con el D.L. N° 1067 y posterior publicación del D.S. N° 013-2008-JUS, se determinó lo referido en la actualidad, esto es la incorporación al proceso de hechos nuevos producidos o que se hayan conocido con posterioridad al inicio del proceso, respetando con ello el principio de igualdad de las partes.

La carga de la prueba en el proceso contencioso administrativo, de acuerdo a lo

mencionado en el artículo 33 del D.S. N° 013-2008-JUS, corresponde a quien afirma los hechos que sustentan su pretensión. Sin embargo, menciona, si la actuación administrativa impugnada establece una sanción o medidas correctivas, o cuando por razón de su función o especialidad la entidad administrativa está en mejores condiciones de acreditar los hechos, la carga de probar corresponde a ésta.

La carga probatoria es aquella circunstancia o situación en que se encuentran las partes durante la secuela procesal, de realizar un acto determinado, que de no realizarse se colocará en una situación desfavorable en el proceso respecto de la otra parte. La carga de la prueba es el gravamen que recae sobre las partes de facilitar el material probatorio necesario al juzgador para formar sus convicciones sobre los hechos alegados o invocados. (SAAVEDRA ROMO, XIV-Marzo 2018)

Nos dice la autora MONZON que, nuestro ordenamiento jurídico ha contemplado un sistema regular de distribución de la carga de la prueba; sin embargo, a partir del dos mil siete, como consecuencia de la STC 01776-2004-AA/TC, Fund.50.c, se ha introducido el concepto de carga probatoria dinámica. El Tribunal Constitucional, en la jurisprudencia citada, ha manifestado lo siguiente:

La carga probatoria dinámica significa un apartamiento de los cánones regulares de la distribución de la carga de la prueba cuando ésta arroja consecuencias manifiestamente valiosas para el propósito del proceso o procedimiento, por lo que es necesario plantear nuevas reglas de reparto de la imposición probatoria, haciendo recaer el onus probandi sobre la parte que está en mejores condiciones profesionales, técnicas o fácticas para producir la prueba respectiva.

Asimismo, menciona que la carga de probar, ya sea por mandato legal o por las orientaciones jurisprudenciales, debería recaer en quien está en mejores condiciones de hacerlo; circunstancia que puede estar justificada en dos razones: a) Proteger a la parte más débil de la relación procesal; b) Imponer la obligación de probar a quien le quede más fácil.(pág. 292)

Entonces debe quedar claro que, la carga de la prueba corresponde a 1) quien afirma los hechos, de acuerdo a lo establecido en el CPC y 2) a quien está en mejores condiciones

de aportar las pruebas suficientes, con relación al caso, del cual a buen entender, es la administración quien está en las mejores condiciones para entregar los medios probatorios importantes en un determinado caso contencioso administrativo, pues el primer proceso que se inicia antes de acudir a la vía judicial, es la administrativa, en la cual el administrado otorga en el procedimiento administrativo todos los documentos que tiene a su disposición con tal de hacer válido su derecho solicitado.

Sin embargo, es de precisar que la parte de la administración tiene como obligación facilitar al proceso todos los documentos que obren en su poder e informes que sean solicitados por el Juez, conforme lo señala el artículo 34 del D.S. N° 013-2008-JUS. Acotando a esto, el contenido de lo dispuesto en el artículo antes mencionado, se complementa con el último párrafo del artículo 31 mencionado anteriormente, pues nos dice la autora MONZON, que permite que las partes no sólo puedan solicitar al Juez la incorporación de algún medio probatorio a las entidades administrativas, sino que establece la obligatoriedad de ellas a cumplir el mandato, haciendo responsables a sus funcionarios responsables y pasibles de sanciones pecuniarias.

Así también, refiere la concordancia de este artículo con el artículo 76 de la Ley 27444, donde se establece como obligación de las entidades públicas, colaborar entre sí para la dilucidación de las controversias; siendo así, con mayor razón están en la obligación de proporcionar la información requerida ante el Poder Judicial y personas que estén interesadas en la información, siempre y cuando no colisionen con el derecho a la intimidad. (págs. 298-299)

## **2.3. PROCESOS PREVISIONALES**

### **2.3.1. DERECHO PREVISIONAL: SEGURIDAD SOCIAL**

Existe en la sociedad la necesidad de seguridad de los seres humanos que implica conservar lo bien logrado y evitar los males que conspiran contra él; por lo que tal protección contra los riesgos sociales y contingencias humanas viene institucionalizado en la seguridad social, siendo un sistema de prestaciones individualizadas, basado en la prevención del riesgo y en la redistribución de los recursos, con el único propósito de coadyuvar en la calidad y el proyecto de vida de la comunidad; definiendo a la seguridad social como la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales que de no ser así ocasionarían la desaparición o una fuente de reducción de los ingresos por causa de enfermedad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y también la protección en forma de asistencia médica. (MONTENEGRO MANCO, 2013, págs. 30 - 31)

Por tanto, la seguridad social aparece como una garantía institucional que expresa por excelencia la función social del Estado, y que posibilita la existencia de este derecho a la pensión... Asimismo, también es imperioso admitir, tal como lo hace el artículo 10 de la Norma Fundamental, que en el país se reconoce el derecho a la seguridad social. Este derecho, que a la vez se concibe como garantía institucional del derecho a la pensión, otorga a la persona no solo la capacidad de recibir algún tipo de monto dinerario para contrarrestar una contingencia, como sucede en el caso de los adultos mayores. También sirve para que el disfrute de su existencia se realice sobre la base de una búsqueda real de una elevación de la calidad de vida de las personas (*Exp. N° 9381-2005-PA/TC, 26/06/2006, PP,F.J. 1*) (QUISPE CHAVEZ, 2009, págs. 223 - 224)

Entonces, se entiende que la seguridad social es inherente a toda persona como un derecho que tiene como efectos el goce de los beneficios de cada uno de los regímenes previsionales establecidos en el país de manera particular.

Considerándose al mencionado derecho como uno de carácter social, debido a que se encamina a proteger al individuo, con el fin de satisfacer sus carencias frente a diversas circunstancias como enfermedades, invalidez, ancianidad, etc; manifestándose principalmente en el derecho de acceso a una pensión de jubilación, protegiendo con ello las contingencias que ocasionan el declive del ciclo de vida humana.

### **2.3.2. DERECHO A LA PENSIÓN**

Reconocido en el artículo 11 de la Constitución Política del Estado, refiriendo: “El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento. La ley establece la entidad del Gobierno Nacional que administra los regímenes de prestaciones a cargo del Estado.”

Para un mejor entendimiento, el Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho a la pensión reconocido en el artículo 11 de la Constitución es un derecho social de contenido económico que impone distintas obligaciones al Estado y que tiene un contenido irreductible, es decir, un contenido esencial que, “está sujeto a las garantías de protección procesal en la vía constitucional”. También ha señalado que el derecho a la pensión, como derecho social, “impone a los poderes públicos la obligación de proporcionar prestaciones adecuadas a las personas en función a criterios y requisitos determinados legislativamente, para subvenir sus necesidades vitales y satisfacer los estándares de la ‘procura existencial’”. (ALVITES ALVITES, 2010, pág. 897)

En tanto, el derecho a una pensión, constituye en nuestra legislación un derecho fundamental que tiene la naturaleza de derecho social – de contenido económico-; compuesto por tres elementos como contenido esencial, establecido por el Tribunal Constitucional en el fundamento 107 de la sentencia recaída en el Expediente N° 00050-2004-AI/TC, los que son:

- El derecho de acceso a una pensión
- El derecho a no ser privado arbitrariamente de la pensión



- El derecho a una pensión mínima vital

Asimismo, es de referir que el contenido esencial constitucionalmente protegido por el derecho a la pensión, es garantizar el obtener prestaciones de pensiones de manera universal y protegida; así también el libre acceso a dichas prestaciones (...) que permita llevar una vida en condiciones de dignidad (2009, pág. 237).

Pero, de acuerdo a lo mencionado, qué se entiende por “pensión”; para el abogado ABANTO REVILLA(2014) no existe un concepto ecuaníme de este término; sin embargo, de acuerdo a su análisis refiere:

(...) la pensión es - independientemente de la contingencia que la origine (enfermedad, accidente, vejez, muerte, etc.) – una suma dineraria, generalmente vitalicia, que sustituiría los ingresos percibidos por una persona, cuando se presente un estado de necesidad, permanente o transitoria, permitiéndole cubrir sus necesidades básicas, y se otorgará siempre que ésta cumpla todos los requisitos previstos legalmente. (pág. 5)

Dicho lo anterior, se debe tomar lo referido por el anterior autor y con ello referir que el acceso a una pensión es un derivado del derecho al mismo, pero que no todo ciudadano tiene el privilegio de obtenerlo, pues solo podrán acceder a una pensión, el ciudadano que tenga la calidad de trabajador y que observen las exigencias de cada sistema. Lo que garantiza la Constitución es que a aquellos que cumplan los requisitos y condiciones fijados por ley no se les niegue acceder al sistema pensionario que elijan. La Constitución asegura la posibilidad de toda persona de gozar de una pensión poniendo a su disposición sistemas pensionarios, pero el goce efectivo de las prestaciones supone que estos respeten los requisitos y condiciones exigidos (*Exp. N° 1776-2004-AA/TC, 26/01/2007, P, F.J. 17*). (2009, pág. 238)

Entendiendo que la acreencia dineraria (pensión) será solo otorgada a aquellas personas que como trabajadores dependientes o independientes hayan respetado los requisitos y condiciones exigidos por ley (acceso a la pensión).

### **2.3.3. PRINCIPIOS DEL DERECHO A LA PENSIÓN**

Implica al principio-derecho de dignidad, principio de idoneidad, principio de progresividad, valor-principio de igualdad, valor-principio de solidaridad, principio de necesidad y principio de proporcionalidad, los mismos que serán detallados en concordancia con lo explicado por el autor QUISPE CHAVEZ (2009).

#### **2.3.3.1. PRINCIPIO – DERECHO DE DIGNIDAD**

La dignidad humana es el presupuesto jurídico de la existencia de todos los derechos fundamentales, donde la persona humana es concebida con un fin en sí mismo, constituyendo su defensa un fin supremo que debe inspirar todos los actos estatales, en particular, y los de la sociedad, en general. Por tanto, la seguridad social y el derecho a la pensión son elementos esenciales que garantizan una vida digna, por tal razón una pensión protegida constitucionalmente es aquella que solo se sustente en el principio de dignidad, infiriendo la existencia de un derecho a la dignidad pensionaria; siendo este derecho una concreción del derecho a la vida; de esta forma el derecho fundamental a la pensión permite alcanzar el desarrollo de la dignidad de los pensionistas.

#### **2.3.3.2. PRINCIPIO DE IDONEIDAD**

Toda injerencia en los derechos fundamentales debe ser idónea para fomentar un objetivo legítimo suponiendo el primer lugar la legitimidad constitucional del objetivo y como segundo lugar la idoneidad de la medida; pues mediante el principio de idoneidad o adecuación, se busca que las reformas constitucionales busquen que las pensionas tengan una pensión equitativa como exigencia de la realización de los valores superiores de justicia e igualdad; siendo incuestionable tal finalidad ya que su legitimidad es un imperativo del Estado Social y Democrático de Derecho.

#### **2.3.3.3. PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD**

El derecho pensionario, puede y debe lograrse de manera paulatina, ejecutando medidas tendentes a que este objetivo se realice a un plazo razonablemente breve que garanticen el goce y ejercicio de conformidad con el contenido esencial de este derecho fundamental.

#### **2.3.3.4. PRINCIPIO DE IGUALDAD**

La igualdad prevista en el inciso 2 del artículo 2 de la Constitución, constituye un derecho fundamental y principio rector de la organización del Estado Social y Democrático de Derecho, teniendo en cuenta que no se vulnerará dicho principio cuando se establezca una diferencia de trato fundada en casos objetivos y razonables. El derecho a la pensión se funda en el valor de igualdad que tiene como objetivo la protección de un colectivo concreto, el de los pensionistas, que, por determinadas razones de edad, sexo o situaciones sociales, físicas, económicas, se encuentra en una situación de desventaja que es necesario compensar.

El valor de igualdad debe concebirse en el sentido material, es decir, en el criterio de igual satisfacción de las necesidades fundamentales.

#### **2.3.3.5. PRINCIPIO VALOR-PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD**

Implica el compromiso directo de cada persona con los fines sociales del Estado, de manera tal que a nadie resulte ajena las nuevas medidas pensionarias que eleven la calidad de vida de la mayoría de los pensionistas. Este valor de solidaridad, entendido como el deber de desarrollar, de acuerdo con las posibilidades y preferencias propias, actividad o función que redunde en el progreso material o espiritual de la sociedad, debe ponderarse a efectos de determinar el contenido esencial del derecho fundamental de la pensión.

#### **2.3.3.6. PRINCIPIO DE NECESIDAD**

Este significa que, para que una injerencia en los derechos fundamentales sea necesaria, no debe existir ningún otro medio alternativo que revista, requiriendo analizar la idoneidad equivalente o mayor del medio alternativo, y, de otro, el menor grado en que este intervenga en el derecho fundamental.

#### **2.3.3.7. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD**

Con este principio, el grado de realización del objetivo de esta debe ser por lo menos equivalente o proporcional al grado de afectación del derecho fundamental; debiendo analizar si la realización del fin perseguido es proporcional a la intervención del legislador en el derecho fundamental a la pensión. La intervención del derecho

fundamental a la pensión, es legítima constitucionalmente, en la medida que el grado de realización del objetivo de la injerencia -justicia e igualdad pensionaria- es proporcional al grado de afectación del derecho; asimismo, porque no lo vacía de contenido ni tampoco desprotege a quienes gozan de él.

#### **2.3.4. JUBILACIÓN**

Indicado líneas arriba lo referido a pensión, es momento de entender la palabra jubilación y el contexto que se forma al unir ambas expresiones.

La Magister costarricense CRUZ MELÉNDEZ(2011), refiere que:

La jubilación se considera como un evento inevitable de la vida y se define como un cambio que se da al final del ciclo de desarrollo de la persona y funciona como un ritual que marca la transición entre la etapa adulta y la vejez. En la mayoría de los casos, coincide la jubilación con el inicio de los cambios físicos, psicológicos y sociales asociados a la etapa de la vejez. Además, la jubilación no es el cese definitivo de toda actividad sino el retiro del trabajo, y afecta las relaciones sociales y familiares de la persona jubilada.(págs. 8-9)

Asimismo, la autora ALPÍZAR JIMÉNEZ(2011), de Costa Rica, citando al autor Aranibar menciona “La jubilación se refiere al retiro laboral de una persona y va acompañado de una pensión que es un derecho que la persona adquiere por haber laborado durante cierta cantidad de años y por haber cotizado en algún régimen de pensión vigente.” (pág. 18)

Así también, al realizar una búsqueda rápida sobre la palabra jubilación, la página del Congreso de la República del Perú(2001), orienta a definirla como un derecho único para cada beneficiario. Consiste en el pago, por parte del organismo gestor, de una suma vitalicia, que se le abona cuando a causa de su edad o tiempo de servicio, cesa voluntariamente en la actividad laboral, o cuando no la puede continuar por una situación de incapacidad total; requiriéndose, por lo general, para tener derecho a ella ser cotizante del respectivo sistema.

De la misma manera, se precisa que en nuestra legislación en materia de sistemas de jubilación está normada principalmente por el Decreto Ley N° 19990, Ley que crea el Sistema Nacional de Pensiones, y el Decreto Ley N° 25897, Ley que crea el Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones; sus normas modificatorias y complementarias.

Durante el Gobierno del General Juan Velazco Alvarado, se promulgó el Decreto Ley N° 19990, el mismo que en su artículo 38°, estableció las edades de jubilación en 60 (sesenta) años para los hombres y en 55 (cincuenta y cinco) para las Mujeres. Luego, mediante el Decreto Legislativo 276, de marzo de 1984, se eleva el límite de edad para el cese de los trabajadores de la administración pública a 70 (setenta) años de edad.

Posteriormente, en noviembre de 1992, con el Decreto Ley N° 25897, se estableció como edad de jubilación los 65 (sesenta y cinco) años. Esta norma se hizo extensiva a los trabajadores del sector público, con la aprobación de la Ley N° 26504, de julio de 1995, donde establece la edad de jubilación en el Sistema Nacional de Pensiones, tanto para hombres como para mujeres, a la edad de 65 años, permaneciendo así hasta la actualidad.

Entonces la jubilación es entendida como el retiro de la situación laboral de una persona, la misma que tiene derecho a adquirir un pago que cotizará el trabajo que realizó durante la cantidad de años laborados a lo largo de su vida; dando con esto un alcance a lo referido a pensión de jubilación; del cual en la legislación peruana está normada por el D.L. N° 19990 y sus modificatorias.

A esto, es importante mencionar que existe la Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor, del 30 de junio del 2016, que establece la edad de la persona adulta mayor, referido en su artículo 2° la edad de 60 o más años de edad; asimismo menciona en su artículo 20° la Atención en materia previsional, de seguridad social y de empleo para estas personas. mencionando: "El Estado promueve una cultura previsional con la finalidad que la persona adulta mayor acceda en forma progresiva a la seguridad social y pensiones, en el marco de lo establecido en los diversos regímenes previsionales (...)"

### **2.3.5. SISTEMA PREVISIONAL PERUANO – PENSIÓN DE JUBILACIÓN**

En la actualidad, el Perú cuenta con dos sistemas de protección social, uno de carácter público (Sistema Nacional de Pensiones – SNP) y el otro privado (Sistema Privado de Pensiones - SPP), otorgando ambos cobertura en materia de pensiones. En ese sentido, el Sistema Peruano de Pensiones, es un sistema contributivo en el cual los trabajadores tienen que aportar para obtener una pensión, y que opera bajo un modelo en el que coexisten de manera paralela dos sistemas.

En ese sentido, Los trabajadores dependientes o independientes podrán elegir entre estos dos sistemas previsionales para percibir a futuro una 'pensión de jubilación', cuando se produzca el cese de sus actividades laborales. Es necesario que el ciudadano se informe bien sobre ambas alternativas para optar por el sistema que más le convenga. (OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL, s.f.)

El sistema de pensiones peruano está constituido por tres regímenes principales: el Decreto Ley N° 19990 (Sistema Nacional de Pensiones -SNP), el Decreto Ley N° 20530 (denominado cédula viva) y el Sistema Privado de Pensiones (SPP). Los dos primeros se encuentran administrados por el Estado; en cambio el tercero es administrado por entidades privadas denominadas Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP). Sin embargo, para la presente investigación, es preciso prestar atención en el Sistema Nacional de Pensiones (SNP), que tuvo como administración al Instituto Peruano de Seguridad Social del Perú, siendo posteriormente derivada a la Oficina de Normalización Previsional, Organismo Público Descentralizado del Sector Economía y Finanzas con personería jurídica de derecho público interno, con recursos y patrimonio propios con autonomía funcional administrativa, técnica, económica y financiera, constituyendo un pliego presupuestal. (MONTENEGRO MANCO, 2013, págs. 31 - 32)

Tal organismo forma parte del Sistema Nacional de Pensiones, de cuál es el fondo que administra los pagos de las pensiones de los asegurados del Régimen del Decreto Ley N° 19990 y demás regímenes que por mandato legal se le encomiende su

administración. Este sistema se creó el 01 de mayo de 1973, este fondo asumió la responsabilidad de la administración y el pago de las pensiones pertenecientes al Régimen del Decreto Ley N° 19990 y demás como la Caja Nacional de Seguro Social del Empleado y Obrero que existieron.

Para LA ROSA ORBEZO(2008), el Sistema Nacional de Pensiones tiene como características relevantes:

- 1) Incorpora a los trabajadores comprendidos en el régimen laboral privado y a los empleados públicos que ingresaron al Estado con posterioridad al 11 de junio de 1962.
- 2) El derecho a la pensión de jubilación se determina sobre la base de los criterios de edad del trabajador (65 años) y sus años de aporte (como mínimo 20 años).
- 3) La tasa de aporte es del 13% de la remuneración pensionable y está a cargo del empleador.
- 4) La pensión corresponde a un porcentaje de la remuneración de la referencia, salvo que esta sea menor a la pensión mínima o superior a la máxima.
- 5) Las pensiones no son nivelables y sus ajustes son potestad gubernamental.(págs. 1-2)

Así mismo menciona los cinco tipos de prestaciones que otorga este sistema, como son pensión de jubilación, con sus derivados de régimen general, o de régimen de jubilación adelantada; pensión de viudez, pensión de orfandad y pensión de ascendencia.

La pensión de jubilación, en el régimen general establece como edad de jubilación 65 años de edad, años de aportación la cantidad de 20 años, un 13% de la remuneración asegurable del trabajador como tasa de aporte, asimismo la pensión mínima en el valor de S/ 415.00 soles y pensión máxima de S/ 857,36.00 soles.

Asimismo, existen pensiones que se dieron dentro del régimen mencionado al tener menos años de aportación, las mismas que se otorgaron hasta 1992, denominadas Pensiones Reducidas, el cual el Magister TORDOYA ROMERO(2011) ilustra tales pensiones en el siguiente cuadro:

TIPO DE PENSIÓN	MONTO EN SOLES
<b>a. Para pensionistas de Derecho Propio:</b>	
Con 20 años o más de aportación	S/ 415.00
Con 10 años y menos de 20 años de aportación	S/ 346.00
Con 6 años y menos de 10 años de aportación	S/ 308.00
Con 5 años o menos de 5 años de aportación	S/ 270.00
<b>b. Para pensionistas por derecho derivado</b> (monto mínimo de suma de pensiones que el causante genere)	S/ 270.00
<b>c. Para pensionistas por invalidez</b>	S/ 415.00

**Fuente:** D.S. N° 028-2002-EF

Asimismo, el RÉGIMEN DE JUBILACIÓN ADELANTADA tiene como edad de jubilación, 55 años (hombres) o 50 años (mujeres); cumplir con 30 años (hombres) o 25 años (mujeres) de aportaciones, ha de tomarse en cuenta que los trabajadores despedidos por reducción de personal o cese colectivo podrán optar a la jubilación adelantada con 20 años de aportes; así también se fijó el 13% como Tasa de aportes; la pensión base es la pensión que hubiera recibido el trabajador bajo el Régimen General. Esta pensión se reduce en 4% por cada año de adelanto respecto de la edad de jubilación establecida en dicho régimen.

Existe a su vez el RÉGIMEN ESPECIAL DE JUBILACIÓN que incluye a los asegurados nacidos antes del 1° de julio de 1931, en el caso de los hombres, o del 1° de julio de 1936, en el de las mujeres. Para acceder a este régimen, los trabajadores deben haber estado “inscritos en las Cajas de Pensiones de la Caja Nacional del Seguro Social o del Seguro Social del empleado” antes de la promulgación del Decreto Ley No. 19990



(abril de 1973). El monto de la prestación equivale al 50% de la remuneración de referencia por los primeros 5 años completos de aportación. Por cada año adicional de aportación, dicha tasa se incrementa en 1,2%, en el caso de los hombres, y 1,5%, en el de las mujeres.

A su vez fueron otros regímenes de jubilación, creados para determinados grupos de trabajadores. Por ejemplo, los mineros, los obreros de construcción civil, los trabajadores marítimos, los periodistas, los cuereros (dedicados a la curtiembre) y los pilotos, entre otros, tienen sistemas de jubilación con requisitos y beneficios particulares. (págs. 35-37)

Ahora bien, al tener un bosquejo del derecho pensionario, es pertinente dar pie a los Procesos Contenciosos Administrativos en Materia Previsional que interesan en este trabajo de investigación, del cual se desarrollará a continuación.

## **2.4. EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN MATERIA PREVISIONAL**

Es la Administración tanto pública como privada la encargada de efectuar el otorgamiento de las pensiones específicas de acuerdo al cumplimiento de los requisitos previstos en la ley; y es el proceso contencioso-administrativo la vía orientada a solicitar la nulidad de los actos administrativos que se consideren contrarios a los derechos subjetivos que a pesar de encontrarse relacionados con materia previsional; sin embargo, no derivan directamente del contenido constitucionalmente protegido por el derecho fundamental a la pensión. Por lo tanto, es competente para conocer la demanda respectiva el Juez Especializado en lo Contencioso Administrativo (o el Juez Civil o Mixto en los lugares en que no exista Juez Especializado en lo Contencioso Administrativo), del lugar del domicilio del demandado o del lugar donde se produjo la actuación impugnada, a elección del demandante.

Una vez que el juez competente del proceso contencioso administrativo se aboque al conocimiento de la causa, deberá entenderse presentada y admitida la demanda contencioso administrativa, y, en aplicación del principio de suplencia previsto en el inciso 4) del artículo 2 de la Ley N° 27584, se otorgará al demandante un plazo razonable a efectos de que adecúe su demanda conforme a las reglas previstas para la etapa postulatoria del proceso contencioso administrativo. Transcurrido dicho plazo sin que el demandante realice la respectiva adecuación, procederá el archivo del proceso. (DE LAMA LAURA, 2011, pág. 34)

Los procesos previsionales en la legislación peruana, está dada por aquellos casos referidos a la solicitud del derecho que tiene un trabajador de pedir el abono de sus aportaciones a la entidad pertinente cuando ha llegado al límite de edad laboral (65 años de edad), cumpliendo con la cantidad de 20 años de aportaciones como mínimo; iniciando este trámite con la solicitud administrativa ante la entidad que ha custodiado sus aportaciones, para luego pasar a un trámite judicial en el caso que no haya sido resuelto el pedido administrativo.

Aquel trámite judicial, es la pieza principal de este tema de investigación, el cual será

referido de acuerdo al proceso contencioso administrativo instaurado en nuestra legislación en base a lo establecido en la Ley 27584 Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo y del Texto único Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo - Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, modificado por el Decreto Ley N° 1067, mencionados al iniciar la Parte III de este capítulo.

Por lo que, es la propia norma contencioso administrativa en concordancia de otras previstas en la legislación peruana quien establece la secuencia del mismo trámite judicial en los casos contenciosos administrativos, la misma que se deberá explicar brevemente para llegar al tema central del trabajo de investigación.

#### **2.4.1. DEMANDA**

La demanda es el acto procesal por la cual los administrados después de haber agotado la vía administrativa (salvo excepciones) solicitan al órgano jurisdiccional la satisfacción de sus pretensiones a través de la sentencia. (ANACLETO GUERRERO, 2016, pág. 215)

En ese sentido, la demanda guarda estricta relación con el derecho de acción, siendo este el que habilita a una persona a demandar con el fin de que sea admitida a trámite. Pues es la demanda, el acto procesal que da inicio al proceso contencioso administrativo.

Para MONZON VALENCIA, citando a Escusol Barra, la demanda es un acto procesal de especial significación; en la misma el actor fundamenta su pretensión y solicita la aplicación del derecho a su favor; para ambas finalidades se vale del expediente administrativo, por la sencilla razón de que la jurisdicción contenciosa administrativa aplica el derecho y solo mediante el derecho controla la actividad administrativa cuyo contenido queda reflejado en el expediente.(pág. 178)

Para esto, la demanda debe cumplir con requisitos para dar pie a su procedencia, siendo estos, la actuación administrativa sujeta al control judicial en la cual está dentro de ella el acto administrativo, el plazo de caducidad y por último, pero no menos importante, el

agotamiento de la vía administrativa. (HUAMAN ORDOÑEZ, 2016, pág. 225)

En nuestro Proceso Contencioso Administrativo, los requisitos de admisibilidad, se encuentran establecidos en el Código Procesal Civil artículo 424 y 425; sin embargo, adicionalmente se ha establecido dos requisitos especiales de admisibilidad sólo aplicables a esta clase de proceso judicial; los requisitos de procedencia que se encuentran detallados en este TUO, aunque sin perjuicio de lo indicado en el artículo 427 del Código Procesal Civil. (MONZÓN VALENCIA DE ECHEVARRÍA, 2011, pág. 179)

Al declarar el juez la admisión de la demanda, es decir la procedencia del trámite de la demanda y posterior desarrollo del proceso, mediante el auto admisorio, procederá notificar a la parte demandada (entidad administrativa) para el conocimiento de la demanda y anexos que la acompañan, a fin de que proceda a ejercer su derecho de defensa mediante la contestación de la demanda.

Asimismo, solicita a la entidad demandada la remisión del expediente administrativo, conforme se explicará a continuación.

#### **2.4.2. REMISION DE LOS ACTUADOS ADMINISTRATIVOS**

La Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, Ley N° 27584, y su modificatoria Decreto Legislativo N° 1067, así mismo como el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, establecen en su artículo 22° y en el artículo 24° respectivamente, la remisión de los actuados administrativos, el cual señala:

##### ***Remisión de actuados administrativos***

*Al admitir a trámite la demanda, el Juez ordenará, de ser el caso, a la Entidad Administrativa, a fin de que el funcionario competente remita copia certificada del expediente con lo relacionado a la actuación impugnada, en un plazo que no podrá exceder de quince días hábiles, con los apremios que el Juez estime necesarios para garantizar el efectivo cumplimiento de lo ordenado, pudiendo imponer a la Entidad multas compulsivas y progresivas en caso de renuencia.*

*El Juez además de realizar las acciones antes referidas en el párrafo anterior, ante la manifiesta renuencia a cumplir con el mandato, prescindirá del expediente administrativo.*

*El incumplimiento de lo ordenado a la entidad administrativa no suspende la tramitación del proceso, debiendo el Juez en este caso aplicar lo dispuesto en el Artículo 282 del Código Procesal Civil, al momento de resolver; sin perjuicio que tal negativa pueda ser apreciada por el Juez como reconocimiento de verdad de los hechos alegados.*

De lo anterior, es necesario precisar lo referido a la expresión “actuados administrativos”, del cual la autora MONZÓN VALENCIA DE ECHEVARRÍA(2011), refiere: “(...) se establece la obligatoriedad de la entidad pública demandada, de cumplir con remitir los actuados administrativos [expediente administrativo] formados en torno al acto administrativo objeto de cuestionamiento.” [subrayado es nuestro](pág. 215)

Dejando establecido que, al referir de los actuados administrativos, se alude al expediente administrativo que la administración tiene en su poder y que han sido formados de acuerdo a las actuaciones administrativas desarrolladas en el procedimiento administrativo originado, de acuerdo al caso, y que debe ser otorgado, en vía judicial, al juez competente conocedor del proceso judicial.

Asimismo, el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, al referirse de los actuados administrativos (expediente administrativo) como medios probatorios (a nivel judicial), precisa: “(...) cumplen un papel trascendental en la fundamentación de una afirmación, en la medida que son los instrumentos a través de los cuales se obtiene información para acreditar un hecho.”(2016, pág. 28)

#### **2.4.2.1. EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO**

Entonces, al quedar establecido que al mencionar a los actuados administrativos se refiere a los expedientes administrativos, es necesario señalar el concepto dado por algunos estudios de la materia como el abogado NUÑEZ MOLINA(2016), quien precisa:

Se sabe que “etimológicamente, la palabra expediente se deriva del latín *expedire*, infinitivo que forma el participio presente *expediens, expedientis*: el que resuelve. Propiamente *expediré* significa apartar los obstáculos de un camino; así metafóricamente, el trámite administrativo se propone apartar los obstáculos para alcanzar determinado objeto” (págs. 2-3)

A ello, el abogado HUAMÁN ORDOÑEZ(2016), señala como concepto de expediente administrativo:

(...) cabe sostener que el procedimiento administrativo necesita contar con el soporte físico o digital necesario y completo<sup>3</sup> que permita conocer que nos hallamos ante actuaciones concatenadas y racionales a efectos de asegurar la predictibilidad del actuar administrativo pues recoge la aplicación concreta de los principios aplicables al trámite, los plazos y términos, la posibilidad impugnativa, la concreción de lo ordenado por la voluntad administrativa, etc.; este soporte se concreta en el denominado expediente administrativo que permite reunir todas aquellas actuaciones realizadas en el tráfico administrativo (...) (págs. 149-150)

Además, el mismo autor sostiene la vinculación del procedimiento y expediente administrativo, señalando que:

El expediente (...) representa un triunfo de la racionalidad humana pues permite el acercamiento del particular a la administración siendo entonces un instrumento o medio de documentación de dicha interacción al punto que nos permite distinguir cuando el procedimiento se encuentra signado por la regularidad o la irregularidad de sus actuaciones -sean éstas de la administración, del administrado o interesado, de otra administración o de un tercero tenga o no interés directo indirecto en el trámite administrativo- lo cual incide, a su turno, con la emisión adecuada o no de un pronunciamiento emanado de la administración en el curso de potestades administrativas o con la posibilidad de su conservación cuando el vicio es susceptible

---

<sup>3</sup>En los argumentos que llevaron al proceso de amparo que concluyó con la emisión de la STC N° 00221-2011-PA/TC se habló, por parte del demandante, de un expediente administrativo incompleto con el cual se resolvió un proceso contencioso administrativo; no obstante, esto no fue materia de análisis en la sentencia constitucional.

de corrección: no en vano, el legislador se ha cuidado de insertar la exigencia del procedimiento regular como parte de los ingredientes de validez del acto administrativo.(pág. 151)

Asimismo, el abogado NUÑEZ MOLINA(2016), cita a Jorge Escola, quien señala que “el expediente administrativo requiere que en su formación se siga una secuencia lógica y razonada, de modo que cada acto y cada trámite ocupen el lugar que naturalmente le corresponda y aparezca como resultado y resumen de los que preceden en el expediente” (pág. 3)

Por otro lado, en opinión de la autora venezolana SOSA GÓMEZ(2015), refiere:

Expediente es un vocablo que se asocia al curso o procedimiento de un asunto, es la materialización del procedimiento de que se trate. Conforman así un conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución, incluyendo las diligencias encaminadas a ejecutarla.(pág. 199)

Quedando sentado que, el expediente administrativo constituye un soporte físico o digital conformado por un conjunto de documentos, verificándose que cumple un papel importante, pues permite compilar las actuaciones realizadas en el procedimiento administrativo, que luego deberá ser incorporado y evaluado de acuerdo al caso, en un futuro proceso contencioso administrativo, constituyendo un medio probatorio que la propia administración debe otorgar, teniendo la calidad de instrumento principal con el fin de acreditar o refutar lo alegado por el demandante en su escrito de demanda.

#### **2.4.2.2. EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO COMO PRUEBA PROCESAL EN PROCESOS PREVISIONALES**

Después de conocer el concepto de expediente administrativo, conviene referir la importancia en los procesos contenciosos administrativos como medios de prueba, teniendo claro que la prueba es una actividad lógica racional, por la que se logra inferir que ciertas afirmaciones realizadas relativas a éstos, constituyen confirmación racional de una aseveración anteriormente emitida por una parte (pág. 19), y que como finalidad importante es acreditar hechos; del cual el expediente administrativo, al ser un conjunto

de documentos que recopilan información administrativa, constituye una de las partes importantes del proceso, así como lo menciona el autor NÚÑEZ MOLINA(2016), quien refiere “(...) existiendo un consenso en el foro y el ejercicio judicial de considerar al expediente administrativo como una prueba; incluso la más importante del proceso, esencial para desentrañar la escurridiza verdad de la litis”. Agregando, además que: “Efectivamente, la naturaleza del expediente administrativo es la de albergar propiamente distintos documentos y actuaciones; pero en sentido estricto, estos son los medios de prueba”(pág. 6).

Asimismo, la legislación venezolana, desde 1998 la Sala Político-Administrativa (sentencia N°300) estableció la especialidad del documento administrativo, configurándolo como una tercera categoría de prueba instrumental, por tanto su carácter auténtico deviene del hecho de ser una declaración emanada de un funcionario público, con las formalidades exigidas en el artículo 18 de la LOPA.

Entonces, el expediente administrativo, debe ser siempre considerado una prueba procesal importante en cada caso contencioso administrativo que se desarrolle ante los juzgados especializados en la materia, pues es este conjunto de documentos los que servirán para el esclarecimiento de la impugnación del acto administrativo realizada por el demandante.

Por lo que, de acuerdo a lo anterior, es momento de referir la importancia que adquieren los expedientes administrativos en los procesos contenciosos de materia previsional, como lo señalado en el Quinto Considerando de la Casación N° 001018-2011-Piura, del cual afirma:

(...) el Juez puede ordenar la actuación de los medios probatorios adicionales que considere precisos; por lo que es necesario se tenga a la vista el expediente administrativo, medio de prueba que adquiere especial relevancia en casos como el presente, sin perjuicio de otras pruebas tendientes a resolver la litis. *[subrayado es nuestro]*(CASACIÓN SOBRE RECONOCIMIENTO DE AÑOS DE APORTES, 2013)

En el expediente administrativo consta la verdad de los hechos y se encuentran todos los



elementos de juicio que fundamentan las decisiones de la Administración, en particular de las decisiones administrativas unilaterales ejecutorias. Luego el juez contencioso-administrativo, al controlar la legalidad de la actividad de la Administración debe acudir al expediente administrativo que es una fuente de prueba y aportarla al proceso proponiendo un medio de prueba para incorporar e introducir la fuente al proceso. El expediente es una fuente de prueba incuestionable previsto por mandato específico del legislador, que ha establecido todo un régimen legal para la existencia, configuración y archivo.

Pues, la importancia que tiene el expediente administrativo en temas previsionales, es fundamental en la solicitud de pensiones de jubilación, pues en la mayoría de veces depende de los documentos que obran en el mencionado expediente para que el juez tenga la convicción que necesita para otorgar la pretensión solicitada por el demandante que, en estos casos está referido a personas que han cesado de sus labores y tienen esa necesidad de recibir las aportaciones que realizaron en su años de servicio laboral, con el fin de poder vivir de manera digna.

Es por ello que, los representantes de la entidad administrativa, en este caso Oficina de Normalización Previsional, deben ser consecuentes de esa necesidad antes mencionada para que estos documentos administrativos puedan llegar a tiempo, dentro del plazo razonable otorgado por la norma contencioso administrativa, ante los juzgados especialistas en la materia, y con ello evitar retrasos y dilación en procesos.

### **2.4.3. POSIBLES CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL RETARDO DE LA REMISIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS**

#### **CAUSAS**

##### **FLEXIBILIZACIÓN PROCESAL**

Después de realizar el recuento de conceptos y tratar de resumir los principales puntos tratados en este tema de investigación, es momento de describir el principal problema por el que se ha originado el tema de tesis propuesto. Iniciando por describir que en el departamento de Lambayeque son inmensas las cantidades de casos en materia

previsional que tienen como entidad demandada a la Oficina de Normalización Previsional – ONP, de los cuales es predecible también mencionar la demora que existe en la solución de tales casos y la espera impaciente que se genera en los justiciables, pues las pretensiones de más relevancia son aquellas que solicitan pensión de jubilación y el reconocimiento de más años de aportaciones con la finalidad de percibir una pensión íntegra para la supervivencia de los demandantes, los mismos que son personas mayores de edad. Personas que han sido cesadas de sus labores por contar con el límite legal de edad dispuesto en nuestro país, esto es de 65 años de edad, para acceder a una pensión de jubilación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 de la Ley N° 26504<sup>4</sup>, ello dentro del régimen general, sin dejar de lado las pretensiones de pensiones de jubilación adelantada

Tal demora, de acuerdo al estudio de los expedientes principales, se debe a varias razones, de los cuales una de ellas es la flexibilización del plazo que otorga el juez en la solicitud de la remisión de expedientes administrativos a las entidades demandadas, y aún más a la entidad de la ONP, flexibilización notoria en los autos admisorios de cada expediente; y que es una causa principal para el retardo de la remisión de los expedientes administrativos. Pues, el Texto único Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo – D.S. N° 013-2008-JUS, señala en su artículo 24°, el plazo sin exceso de 15 días para que la entidad administrativa remita copias del expediente relacionado a la actuación impugnada, refiriendo además que el juez realizará los apremios necesarios para el cumplimiento efectivo de lo ordenado, pudiendo imponer multas a la entidad.

Disposición que no logrará cumplirse efectivamente, ya que se demostrará el incumplimiento del plazo mencionado, y además se observarán como “apremios” por parte del juez, días que alargarán el plazo hasta más de un mes contando con las

---

<sup>4</sup>Artículo 9 de la Ley que modifica el Régimen de Prestaciones de Salud, el Sistema Nacional de Pensiones, el Sistema Privado de Fondos de Pensiones y la estructura de contribuciones al FONAVI. Ley 26504.- La edad de jubilación en el Sistema Nacional de Pensiones a que se refiere el Decreto Ley N° 19990 es de 65 años. Por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, podrá fijarse edades de jubilación inferiores a la señalada en el párrafo anterior para aquellos grupos de trabajadores que realizan labores en condiciones particularmente penosas que implican un riesgo para la vida o la salud proporcionalmente creciente a la edad de los trabajadores, siempre que cumplan con los requisitos de aportación establecidos por la ley.

formalidades de ley (notificaciones), teniendo el ansiado expediente administrativo varios meses después de interpuesta la demanda.

### **CONDUCTA RENUENTE DE LA ENTIDAD ADMINISTRATIVA**

Si bien se ha mencionado, la cooperación de la entidad administrativa está dispuesta en el artículo 34 del D.S. N° 013-2008-JUS, de las cuales señala que las entidades administrativas deberán facilitar al proceso todos los documentos que obren en su poder e informes que sean solicitados por el Juez. En caso de incumplimiento, el juez podrá aplicar las sanciones previas en el artículo 53 del Código Procesal Civil al funcionario responsables; sin embargo, la colaboración precisada por la norma no es tomada en cuenta del todo en los procesos contenciosos, pues lo que realizan los representantes de la entidad es tratar de dilatar más los procesos, pues en mayoría de casos no se observa pronunciamiento alguno, de acuerdo a los mandatos impuestos por el juez; viendo con ello la falta de interés en el proceso tramitado, el mismo que perjudica tanto a la parte demandante como a la entidad misma, pues de su renuencia se le aplica las multas progresivas dispuestas en la norma procesal.

### **CONSECUENCIAS**

#### **DILACIÓN DE LOS PROCESOS**

Como una de las consecuencias es la dilación de los procesos en materia contencioso administrativa y la vulneración a los principios de inmediación, concentración, economía y celeridad procesal; pues se procura que el desarrollo de los procesos, ocurran en el menor número de actos procesales, buscándose de tal manera la concentración de los mismos; así también que tal reducción se realice sin afectar el carácter imperativo de las actuaciones que lo requieran, con lo cual se busca la economía en el proceso.

Y por ende exista la celeridad procesal, la misma que radica en que la actividad procesal se realice diligentemente y dentro de los plazos establecidos, debiendo el Juez tomar las medidas necesarias para lograr una pronta y eficaz solución del conflicto de intereses o incertidumbre jurídica.

Trayendo consigo la espera impaciente de los demandantes en obtener un fallo de

acuerdo a la pretensión solicitada en sus demandas, y con ello hasta el fallecimiento de personas ancianas por la demora excesiva de sus procesos; perjudicando la tutela jurisdiccional efectiva de los demandantes.

#### **MULTAS APLICADAS A LA ENTIDAD ADMINISTRATIVA**

Esta consecuencia favorece a la administración, pues la demora en entregar el expediente administrativo trae consigo la aplicación de multas y posible detención del funcionario encargado de la remisión de tales expedientes, del cual perjudica a su vez a la demandada, pues las multas impuestas en ocasiones son más de una Unidad de Referencia Procesal, las mismas que al ser apeladas, generan más procesos judiciales aglomerando las cargas procesales en los juzgados especializados.

#### **2.4.4. REMISIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS EN LEGISLACIÓN COMPARADA**

##### **2.4.4.1. ESPAÑA(WOLTERS KLUWER, s.f.)**

Una de las mayores preocupaciones de la ley Jurisdiccional ha sido la de agilizar la resolución de los litigios y como uno de los aspectos en los que la tramitación del procedimiento se demoraba de forma injustificada era en el envío del expediente administrativo al Tribunal que conoce del recurso contencioso administrativo; por lo que, se han introducido mecanismos a fin de, como indica la Exposición de Motivos de la Ley, "poner definitivamente coto a prácticas administrativas injustificables y demasiado extendidas que alargan la tramitación de muchas causas".

Ha de recordarse que el recurrente se limita a presentar un simple escrito de interposición al Juzgado o Tribunal indicando la actuación administrativa frente a la que recurre, el órgano Judicial; pues una vez admitido a trámite el recurso, reclama el expediente administrativo al órgano autor de la actuación impugnada y tan pronto se recibe el expediente lo entrega al recurrente para que formalice la demanda. Este sistema es el que se sigue en el llamado Procedimiento Ordinario. Sin embargo, en el Procedimiento Abreviado, regulado en el artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa que se utiliza para asuntos de menor complejidad, el

recurrente presenta directamente la demanda, y, una vez admitido a trámite el recurso, el órgano judicial reclama el expediente y, una vez recibido lo pone de manifiesto al recurrente para que a la vista del mismo pueda solicitar determinados medios de prueba o introducir en el acto de la vista nuevos motivos impugnatorios.

### Garantías

a) El expediente se reclama al órgano administrativo autor de la actuación administrativa impugnada. En la Ley Jurisdiccional de 1956 se reclamaba genéricamente a la Administración lo que generaba en muchas ocasiones una considerable pérdida de tiempo. En la actualidad, se reclama directamente al órgano correspondiente (art. 48.1 Ley 29/1998).

b) El expediente ha de remitirse en el plazo improrrogable de 20 días a contar desde que la comunicación judicial haya entrado en el registro general del órgano requerido, y la fecha de entrada ha de comunicarse al órgano judicial. De este modo, el Juzgado o Tribunal correspondiente puede computar el plazo de los veinte días, que es improrrogable, a partir de la fecha en la que conste que se ha comunicado al órgano administrativo la reclamación judicial del expediente (art. 48.3 Ley 29/1998).

c) Transcurrido el plazo de remisión del expediente sin haberse recibido completo, se reiterará la reclamación y, si no se enviara en el término de diez días contados como dispone el apartado 3, tras constatar su responsabilidad, previo apercibimiento del Secretario judicial notificado personalmente para formulación de alegaciones, el Juez o Tribunal impondrá una multa coercitiva de trescientos a mil doscientos euros a la autoridad o empleado responsable. La multa será reiterada cada veinte días, hasta el cumplimiento de lo requerido.

De darse la causa de imposibilidad de determinación individualizada de la autoridad o empleado responsable, la Administración será la responsable del pago de la multa sin perjuicio de que se repercuta contra el responsable.

La imposición de tales multas ha de realizarse mediante un auto motivando las razones que justifican su imposición. El auto que así lo acuerde es susceptible de recurso de

reposición.

Si pese a la imposición de las multas coercitivas no se remitiese el expediente completo, una vez impuestas las tres primeras multas, la Ley contempla que el Juez o Tribunal competente ponga los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, a los efectos de incoar un procedimiento contra la autoridad o empleado responsable. El requerimiento cuya desatención puede dar lugar a la imposición de la tercera multa coercitiva contendrá el apercibimiento de la posibilidad de actuación por la vía penal (art. 48.10 Ley 29/1998). Por otra parte, las multas coercitivas, una vez firmes, serán hechas efectivas por la vía de apremio (art. 48.9 Ley 29/1998).

d) Otras medidas asegurativas. La ley pretende evitar que la falta de envío del expediente constituya un impedimento para el recurrente que imposibilite el avance del proceso. Por esa razón, prevé la posibilidad de que el recurrente solicite se le conceda plazo para formalizar la demanda y, una vez verificado, si con posterioridad se recibe el expediente se le haga entrega del mismo a la parte demandante y, en su caso, a la demandada, para que puedan efectuar las alegaciones complementarias que consideren oportunas (art. 53 Ley 29/1998). Para este caso se prevé que si la demanda se hubiera formalizado sin haberse recibido el expediente se emplazará a la Administración demandada para contestar apercibiéndola de que no se admitirá la contestación si no va acompañada del expediente (art. 54.1 Ley 29/1998).

También se prevé que la Administración no puede hacer uso del trámite de alegaciones previas si no hubiera acompañado el expediente administrativo (art. 58 Ley 29/1998).

#### **2.4.4.2. FRANCIA (MEJIA BETANCOURT, 2016)**

En el Derecho francés, la obligación de remitir el expediente administrativo no está establecida en los textos, sino que es consecuencia de los poderes inquisitoriales del juez contencioso, que puede solicitar a la Administración la remisión de los documentos y piezas —expediente administrativo—, así como en relación con los particulares, hacerles solicitudes de instrucción de diverso tipo. El derecho del juez francés de dirigirse a la Administración se denomina de las *injonctions d'instruction*. En virtud de esta fórmula jurisprudencial, que se ha hecho un clásico, le pertenece al juez: «exigir a la

Administración competente la producción de todos los documentos susceptibles de establecer su convicción y de permitir la verificación de las alegaciones del recurrente». Por esta vía jurisprudencial, el juez contencioso francés tiene el derecho de exigir a la Administración: «de comunicarle todos los expedientes, piezas, documentos, informes, a partir de los cuales han sido tomadas las decisiones atacadas de manera de permitir de apreciar la legalidad de esas decisiones». «Por lo que, si la Administración rechaza de satisfacer a lo que le es solicitado en el plazo señalado, su actitud será sancionada: las alegaciones del recurrente serán tenidas por fundadas»

#### **2.4.4.3. ARGENTINA(ROMERO, 2014)**

El procedimiento ordinario para interponer recurso contencioso-administrativo, en Argentina, está regulado en los artículos 56 a 87 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa N° 4106.

Antes de la interposición del recurso contencioso, el recurrente habrá de cumplir un requisito previo, consistente en el agotamiento de los recursos administrativos (hasta poner fin a la vía administrativa), o bien formular las reclamaciones que procedan contra la inactividad administrativa, o su actuación material por vía de hecho.

Este procedimiento se inicia mediante la presentación del escrito de interposición por parte del recurrente: "PREPARA ACCIÓN JUDICIAL", que se limitará a citar el comportamiento o actuación impugnada, solicitando la remisión de las actuaciones administrativas donde recayó el acto impugnado.

Una vez admitido la misma, el órgano jurisdiccional ha de solicitar a la Administración recurrida la remisión del expediente de que se trate. Tras la entrega del expediente al recurrente, se le concede un plazo de 10 días para que ejerza la opción del RECURSO FACULTATIVO o de 30 días para que promueva la DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA en la que se hará referencia a los hechos, fundamentos de Derecho y pretensiones que desee formular, así como los documentos que procedan para defender su derecho.

Presentado el escrito de demanda, se le dará traslado a la Administración demandada

para que en plazo de 30 días pueda formular escrito de contestación.

Por otro sí, las partes podrán solicitar al órgano que se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer los hechos en que no coincidan las partes y sean trascendentes para el fondo del asunto. La prueba se regirá por las reglas contenidas en la Ley 4106. También se podrán practicar pruebas de oficio, a propuesta del propio Tribunal, asegurando en todo caso que las partes puedan hacer las alegaciones que estimen pertinentes sobre dichas pruebas. Las partes podrán solicitar que se celebre vista, que se presenten conclusiones o que se declare el pleito concluso, sin más trámite, para sentencia. Los pronunciamientos de la Sentencia podrán consistir en la inadmisibilidad de la demanda, su estimación o desestimación total o parcial, y la eventual condena en costas.

El procedimiento acelerado se regula en el artículo 22 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Este procedimiento cuando el tribunal, a pedido de parte y cuando existen "*prima facie*" irregularidades en la decisión administrativa recurrida y la posibilidad de daños graves si se produce a su ejecución, podrá dictar resolución fundada disponiendo la abreviación de los plazos procesales establecidos, excluyendo en lo posible las convocatorias a audiencias. También dispondrá el diligenciamiento urgente de medidas anticipadas para la comprobación de los hechos invocados en el litigio, de forma de poder dictar sentencia en breve tiempo.

Este instituto, ya regulado anteriormente, ha sido muy poco usado, configurando un derecho de la parte exclusivamente, tal vez porque los plazos procesales de la ley ya son suficientemente cortos y el pedido previo de abreviación insumiría más tiempo, máxima con la existencia del trámite del RECURSO FACULTATIVO (Art. 94 y ss.) Puede acotarse la totalidad del proceso o partes del mismo con su pedido previo.

Esta facultad del Tribunal debe complementarse con las facultades ordenatorias e instructorias del art. 36 del Código Procesal Civil y Comercial, de acuerdo a la aplicación supletoria dispuesta por los artículos 41 y 115 de la Ley 4106.

De igual manera, la anticipación de pruebas debe considerarse juntamente al artículo 30 de aseguramiento de las mismas.

REVIDATTI, prevé la convocatoria a audiencia y la notificación a la contraria.



Se trata de un procedimiento esencialmente oral centrado en el acto de la vista, donde se fijan los hechos y se formulan alegaciones, practicándose la propuesta y admitida. También serán orales las conclusiones que se presenten tras la prueba.

Presenta algunas particularidades de trámite en relación al procedimiento ordinario, destacando que la iniciación se produce directamente por demanda (en el procedimiento ordinario puede darse, pero en escasos supuestos); así mismo, el trámite de prueba no permite la formulación de preguntas y repreguntas a los testigos.

#### **2.4.4.4. VENEZUELA (MEJIA BETANCOURT, 2016)**

En el sistema venezolano del contencioso-administrativo, el juez tiene la obligación procesal de solicitar y ordenar la remisión del expediente administrativo, y la parte recurrente también dispone del derecho de acceder al expediente administrativo y traerlo al juicio como un derecho propio dentro del proceso contencioso-administrativo, de conformidad a su derecho constitucional a la defensa y el debido proceso, reconocido por el principio de libertad de pruebas, establecido en el artículo 395 del Código de Procedimiento Civil, el derecho de acceso al expediente administrativo previsto en la Ley 80, y por la existencia de una vía procesal para hacerlo, como lo es el medio de pruebas de «informes y copia», conforme al artículo 433 del Código de Procedimiento Civil que le permite a la parte traer al proceso el expediente administrativo.

En el sistema venezolano no existe una regla específica que obligue a la incorporación del expediente administrativo al proceso antes de la demanda como en el caso español, sino que más bien se acerca a la fórmula jurisprudencial francesa, pero dejando la potestad-obligación de solicitar el expediente administrativo en el juez. Sin embargo, juega en el Derecho venezolano el principio de libertad de pruebas de que disponen las partes, por lo cual puede el recurrente incorporar el expediente administrativo al proceso por esa vía procesal.

**CAPITULO III:**  
**ANALISIS Y RESULTADOS**

**3.1. INSTITUCIÓN.**

Corte Superior de Justicia de Lambayeque

**3.2. ÓRGANO JUDICIAL.**

Tercera Sala Laboral de Chiclayo.

**3.3. FUENTE DE INFORMACIÓN.**

Libro de Ponentes de la Tercera Sala Laboral de Chiclayo.

**3.4. POBLACIÓN**

En la presente investigación, los resultados fueron obtenidos mediante la recolección de datos obtenidos del Libro de Ponentes de la Tercera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, del cual se verificó que en dicho órgano judicial se tramitaron 1856 expedientes en total, teniendo como demandados a diferentes entidades del Estado entre ellos la Oficina de Normalización Previsional.

Del análisis del total de expedientes, se encontró que 527 de ellos tienen como demandados a la Oficina de Normalización Previsional, de los cuales 163 expedientes tienen como pretensión principal la pensión de jubilación y el reconocimiento de años de aportación, los mismos que constituyen la población de la presente investigación, los que servirán para obtener la muestra a fin de contrastar la hipótesis planteada.

**3.5. MUESTRA.**

De los 163 expedientes que tienen como pretensión la pensión de jubilación y el reconocimiento de más años, se han tomado como muestra 30 expedientes.

Permitiendo determinar la vulneración de los Derechos Fundamentales del Debido Proceso y la Tutela Jurisdiccional Efectiva de los justiciables, referido principalmente en la demora de la remisión de los actuados administrativos en el plazo de quince días establecido por ley, a cargo de la entidad demandada.

**TABLA 1**

*Número total de expedientes de materia previsional contra la Oficina de Normalización Previsional en apelación ante la Tercera Sala Laboral en el Año Jurisdiccional 2018*

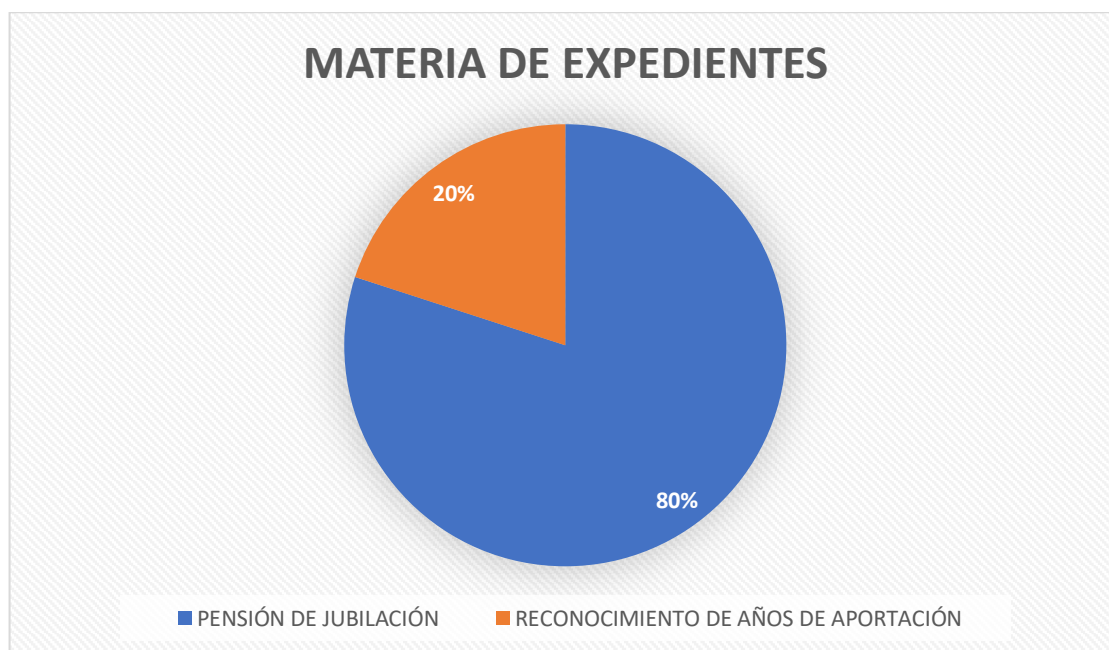
<b>MATERIA DE EXPEDIENTES</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PORCENTAJE</b>
<b>PENSIÓN DE JUBILACIÓN</b>	131	80%
<b>RECONOCIMIENTO DE AÑOS DE APORTACIÓN</b>	32	20%
<b>TOTAL</b>	163	100%

*Fuente: Libro de Ponentes de la Tercera Sala Laboral de Chiclayo*

**Comentario de la TABLA N° 1**

En esta primera tabla se muestra la cantidad de procesos tramitados ante la Tercera Sala Laboral, referidos solo a pretensiones de pensión de jubilación y reconocimiento de años de aportaciones, los mismos que se detallan en el ANEXO 1.

**GRAFICO 1**



*Fuente: Libro de ponentes de la Tercera Sala Laboral de Chiclayo*

### ANÁLISIS DEL GRAFICO 1

Del gráfico se muestra que la materia de pensión de jubilación es una de las más importantes tramitadas ante la Tercera Sala Laboral, con un 80% del total que equivale a 131 expedientes, asimismo el 20% del total corresponde a la materia de reconocimiento de años de aportación que equivale a 32 expedientes previsionales.

**TABLA 2**

*Expedientes para muestra del Año Jurisdiccional 2018*

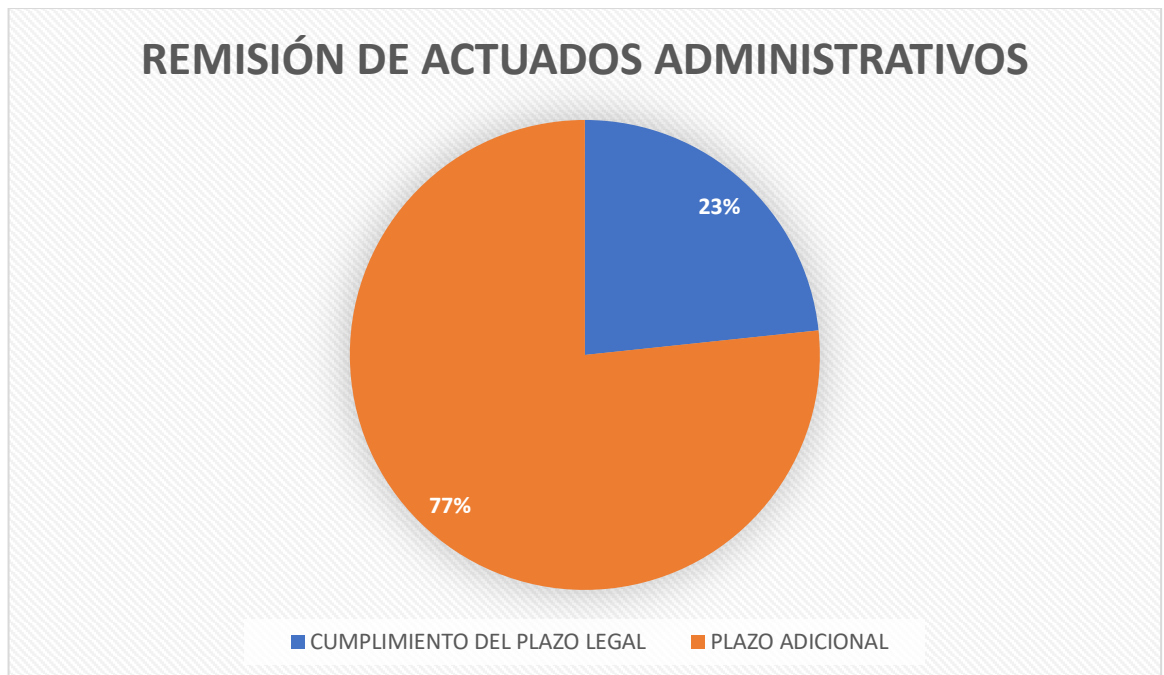
<b>PLAZO PARA REMISIÓN DE ACTUADOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PORCENTAJE</b>
<b>CUMPLIMIENTO DEL PLAZO LEGAL (15 DÍAS)</b>	<b>7</b>	<b>23%</b>
<b>PLAZO ADICIONAL (5 A MÁS DÍAS)</b>	<b>23</b>	<b>77%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>100%</b>

*Fuente: Análisis de expedientes en la página de Consulta de Expedientes del Poder Judicial*

### Comentario de la TABLA N° 2

De la anterior, se verifica que del total de 30 expedientes utilizados como muestra, sólo 7 de ellos cumplen el plazo de 15 días otorgado por ley que equivalen al 23% del total; asimismo 23 de los expedientes analizados el juez ha otorgado plazo adicional de 5 a 35 días para la remisión del expediente administrativo que equivale al 77% del total. Lo mismo que se detallan en el ANEXO 2.

## GRAFICO 2



*Fuente: Análisis de expedientes en la página de Consulta de Expedientes del Poder Judicial*

### ANÁLISIS DEL GRÁFICO 2

Del gráfico, se observa que el 77% de los expedientes analizados que hacen un total de 23, los jueces han otorgados plazos adicionales de 5 a más días; y solo el 23% del total, referido a 7 expedientes analizados, han logrado cumplir con el plazo legal de 15 días establecidos por ley.

### 3.6. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS

Esta última parte del estudio, tiene por finalidad comprobar adecuadamente la verdad o falsedad de la hipótesis, referida a que la modificación del artículo 24 del D.S. N° 013-2008-JUS, en el sentido que el Juez tendrá por apersonada a la demandada siempre que anexe el expediente administrativo a su contestación de demanda, evitaría dilación en el proceso y la vulneración de la Tutela Jurisdiccional Efectiva y el debido proceso; la misma que se corroboró al emplear los métodos y técnicas específicas que permitieron

verificar y analizar los datos obtenidos en el enfoque práctico de este trabajo de investigación, del cual a través de un análisis del artículo 24° del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, se determina la incorrecta aplicación del artículo, con la flexibilización del plazo legal de 15 días que ha sido establecido para la remisión de los actuados administrativos; pues si bien el artículo menciona sobre posibles apremios estimados por el juez para garantizar el efectivo cumplimiento, es necesario mencionar que estos apremios de otorgar un plazo adicional a la entidad demandada ONP perjudica a los demandantes, debido a que en la mayoría de los expedientes consultados, 23 de ellos, se otorgan de 5 hasta 35 días de plazo adicional para la remisión de los expedientes administrativos (anexo 2); viendo también que del total analizado solo son 7 expedientes en donde se ha cumplido con el mandato legal establecido; por lo que se concluye que la ONP opta por una conducta renuente vulnerando con ello el artículo 34° del D.S. N° 013-2008-JUS en cuanto a la obligación que esta tiene de colaboración por parte de la administración en los procesos contenciosos administrativos.

Por otro lado, el juez al otorgar el plazo adicional en exceso vulnera los derechos fundamentales del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva; así como el principio de suplencia de oficio que vincula los principios de inmediación, concentración, economía y celeridad procesal del Código Procesal Civil.

Entonces, se llegó a la conclusión que la hipótesis planteada confirma la formulación que se planteó en un inicio, dando pie a la propuesta de modificación del artículo 24 del D.S. N° 013-2008-JUS.

### **3.7. PROPUESTA**

De acuerdo a lo antes expuesto, se plantea que el artículo 24 del D.S. N° 013-2008-JUS sea modificado de tal manera que la entidad administrativa cumpla con entregar el expediente administrativo en un plazo razonable, a fin de que se pueda respetar el principio de celeridad procesal y además obtener el amparo de un debido proceso y de una tutela jurisdiccional efectiva que los justiciables confían conseguir al momento de interponer las demandas contencioso administrativas con pretensiones previsionales referidas a pensiones de jubilación y reconocimiento de años de aporte que, a la larga

son considerados como derechos alimentarios en beneficio de las personas que han cesado en sus labores.

Tal propuesta, tiene como base lo dispuesto en la legislación española, pues la misma trata de prever que la administración entregue el expediente administrativo a fin de entenderse por apersonada en un proceso contencioso administrativo; sin embargo debemos tener en cuenta que la legislación española tiene un trámite diferente al de la legislación peruana, pues el proceso contencioso-administrativo, no comienza con una demanda, sino con la presentación de un escrito de interposición en la que el actor solicita al órgano jurisdiccional que inicie el proceso. Posteriormente será cuando el demandante interponga su demanda en la que incluirá su pretensión.

Por lo tanto, se observa que en el proceso contencioso-administrativo con el escrito de interposición se ejercita la acción y con la demanda la pretensión, facilitando así la labor del actor, pues en el escrito de interposición identificará el acto, resolución o disposición que se recurre para que la administración competente remita el expediente administrativo y sobre el mismo pueda el actor presentar su demanda fijando con precisión la pretensión que ejercita.

El escrito de interposición del recurso debe ir acompañado con una serie de documentos, del cual el Juez, de oficio, controlará la validez de la comparecencia y se requerirá a las partes interesadas exigiendo el emplazamiento personal de los que resultan interesados en el expediente administrativo. Junto con la adopción del acuerdo del anuncio del recurso, el tribunal reclamará el expediente administrativo a la administración denunciada, tratándose de un requisito fundamental para garantizar el derecho de defensa del actor puesto que en él constan los antecedentes del acto y el procedimiento, a la vez que sirve de control respecto al emplazamiento que de todos los que aparecen como interesados en el mismo debe realizar la administración.

El emplazamiento de la administración se entenderá hecho con la reclamación del expediente y se entenderá personada cuando remita dicho expediente. Si la Administración requerida no remitiera el expediente, el funcionario culpable será debidamente sancionado y, si no fuera posible determinar el funcionario que debe ser

sancionado, dicha sanción recaerá sobre la Administración responsable. Remitido el expediente por la Administración, el juez podrá, tras su examen, inadmitir el recurso.

Remitido el expediente administrativo al órgano jurisdiccional, éste dará traslado al actor para que presente la demanda. En caso de no atender al requerimiento de entrega del expediente, las partes demandantes podrán solicitar que les permitan presentar su demanda, pudiendo hacer alegaciones complementarias a la misma si lo estiman conveniente tras la posible posterior remisión del expediente. También la parte demandante puede solicitar la suspensión del plazo para interponer la demanda si considera que el expediente no está completo y resulta necesario que se complete. De la demanda se da traslado a los demandados para que en el plazo de veinte días comunes contesten a la demanda, en primer lugar, la Administración demandada. Para forzar la remisión de los expedientes administrativos, el legislador prevé que, en caso de ausencia del expediente administrativo, la Administración no pueda contestar a la demanda.

Por lo que, después de lo referido a la legislación española, retomando la propuesta de modificación del artículo 24 del D.S. N° 013-2008-JUS, ésta se cimenta en el hecho de que la Administración, en especial la ONP, remita el expediente administrativo junto a su contestación de la demanda, en el plazo de 10 días concedido por ley; de lo contrario se le declararía inadmisibile su contestación de demanda.

Es importante mencionar que tal modificatoria estaría acorde con lo establecido en el auto del Tribunal Constitucional recaído en el Expediente N° 02214-2014-PA/TC, de fecha 07 de mayo del 2015, el mismo que refiere en su fundamento 29. “Es necesario destacar que cuando la Constitución ha establecido en el artículo 1 que "la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado", pues ha consagrado precisamente un principio exigible a la sociedad y principalmente al Estado para que, en lo que se refiere a toda actuación jurisdiccional, se efectivicen obligaciones concretas que tengan como finalidad primordial el resguardo de derechos como el de la "efectiva" tutela jurisdiccional en procesos de amparo previsionales, tomando como base el respeto a la dignidad de la persona anciana y que, en el caso de éstas, la propia Norma Fundamental exige un trato especial dada su condición especial (artículo 4).” Asimismo, refiere en su fundamento 30. Por tanto,



resulta inadmisibile desde todo punto de vista que una persona anciana de 99 años tenga que transitar por los despachos judiciales, durante más de 10 años, en la etapa de ejecución de sentencia, para cobrar una deuda que el Estado tiene con ella. En tal sentido, el Tribunal Constitucional debe establecer con criterio vinculante la siguiente exigencia: *todos los órganos jurisdiccionales tienen la obligación de otorgar mayor celeridad a los procesos que involucren derechos de las personas ancianas cuanto mayor sea la edad de dichas personas, bajo responsabilidad.* (AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, 2015)

De lo anterior, se señala el trato preferencial que otorga el Tribunal Constitucional para las personas mayores de edad, a fin que se respete el artículo 1 de la Constitución y se otorgue mayor celeridad procesal. No olvidando de Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor, que refiere en su Artículo 20, sobre la Atención de la persona adulta mayor en materia previsional, de seguridad social y empleo, señalando que “El Estado promueve una cultura previsional con la finalidad de que la persona adulta mayor acceda en forma progresiva a la seguridad social y pensiones, en el marco de lo establecido en los diversos regímenes previsionales...”.

De ello, conviene referir importantes ventajas de la propuesta planteada, que ayudarán a verificar que la modificación del artículo 24 del D.S. N° 013-2008-JUS constituye un gran avance para el desarrollo de los procesos contenciosos administrativos en materia previsional.

**ARTÍCULO 24 DEL D.S. N° 013-2008-JUS: REMISIÓN DE ACTUADOS ADMINISTRATIVOS**

**ACTUAL:**

Al admitir a trámite la demanda, el Juez ordenará, de ser el caso, a la Entidad Administrativa, a fin de que el funcionario competente remita copia certificada del expediente con lo relacionado a la actuación impugnada, en un plazo que no podrá exceder de quince días hábiles, con los apremios que el Juez estime necesarios para garantizar el efectivo cumplimiento de lo ordenado, pudiendo imponer a la Entidad multas compulsivas y progresivas en caso de renuencia.

El Juez además de realizar las acciones antes referidas en el párrafo anterior, ante la manifiesta renuencia a cumplir con el mandato, prescindirá del expediente administrativo.

El incumplimiento de lo ordenado a la entidad administrativa no suspende la tramitación del proceso, debiendo el Juez en este caso aplicar lo dispuesto en el Artículo 282 del Código Procesal Civil, al momento de resolver; sin perjuicio que tal negativa pueda ser apreciada por el Juez como reconocimiento de verdad de los hechos alegados.

**MODIFICADO:**

*Al admitir a trámite la demanda sobre materia previsional, el Juez ordenará, a la Entidad Administrativa demandada en estos casos, a fin de que el funcionario competente remita el expediente administrativo con lo relacionado a la actuación impugnada, anexado con el escrito de su contestación de la demanda, considerándose con ello la actuación de medios probatorios con lo cual se tendrá por apersonada, de lo contrario se declararía inadmisble la contestación de demanda.*

*El incumplimiento de lo ordenado a la entidad administrativa no suspende la tramitación del proceso, debiendo el Juez en este caso aplicar lo dispuesto en el Artículo 282 del Código Procesal Civil, al momento de resolver; sin perjuicio que tal negativa pueda ser apreciada por el Juez como reconocimiento de verdad de los hechos alegados.*

**OCASIONA:**

- Dilación de los procesos contencioso administrativos en materia previsionales.
- Multas progresivas y compulsivas.
- Carga excesiva de procesos previsionales
- Carga excesiva de cuadernos de multa

**OCASIONA:**

- Respeto por los derechos al debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva.
- Respeto por el principio de suplencia de oficio y demás principios del código procesal civil como economía, celeridad procesal.
- Procesos céleres en materia previsional.
- Evitará la aplicación de multas progresivas y compulsivas.
- Evitará cargas excesivas de procesos previsionales y cuadernos de multa.

## CONCLUSIONES

- Se logró determinar que la dilación de los procesos contenciosos en materia previsional es debido a la flexibilización del artículo 24 del D.S. N° 013-2008-JUS, que otorga el juez en las resoluciones siguientes al auto admisorio que hace exceder los apremios estipulados en el artículo logrando que los procesos previsionales sean extensos, perjudicando con ello a las personas mayores de edad, ya que la prolongación del fallo de los procesos de esta naturaleza evita que estas personas perciban una pensión de jubilación digna en el tiempo preciso al cese de sus labores; y además perjudica al propio Estado, pues en la prolongación de la remisión del expediente administrativo y el proteger la conducta renuente de la misma entidad demandada, da inicio a la imposición de multas, las mismas que al ser aceptadas deben ser abonadas a favor de la institución judicial (Poder Judicial). Tal conclusión, se logró al realizar el análisis y obtener los resultados de los expedientes revisados, vistos en el presente trabajo, donde el juez otorga a la entidad demandada ONP plazos adicionales al plazo legal de 15 días, llegando a otorgar hasta 35 días en diferentes resoluciones después del auto admisorio para la presentación del expediente administrativo.
- La importancia de los expedientes administrativos es vital para obtener una decisión correcta de acuerdo a las pretensiones solicitadas por los justiciables, pues este expediente reúne las actuaciones realizadas en el procedimiento administrativo del cual permitirá que el juez aclare las dudas que posiblemente se le hayan generado al iniciar el proceso contencioso administrativo. Teniendo como causa la flexibilización procesal si no se entrega a tiempo el mencionado expediente, pues prescindir de él no sería una salida correcta en los casos contencioso administrativos, determinándose a su vez que otra causa en el retardo de su remisión es la conducta renuente de la entidad demandada; asumiendo como consecuencias de estos la dilación de procesos y la imposición de multas a la entidad demandada.

- Ante la contrastación de la hipótesis planteada, la incorporación de un apartado especial referido a la remisión de los actuados administrativos para casos de temas previsionales, sería una propuesta congruente de acuerdo a las situaciones previstas, pues podría lograrse un adecuado respeto del debido proceso si no se otorgaría un trato especial dilatorio a la entidad demandada cuando se trata de entregar el expediente administrativo, pues solo así el juez estaría actuando con imparcialidad en el desarrollo del proceso contencioso administrativo.

## RECOMENDACIONES

- En relación al tema de investigación, y dentro de los parámetros vistos en la sociedad actual, se recomienda una mayor atención a casos relacionados a temas pensionarios, a fin de obtener procesos con ejecución de sentencias en el tiempo más prudente posible, pues ahí radica la razón de la interposición de los mencionados casos.
- Asimismo, se recomendaría una actuación de buena fe procesal a la Oficina de Normalización Previsional, pues también depende de su conducta procesal para el correcto y efectivo desarrollo de los casos, y más aún si como pretensión se tiene el otorgamiento de una pensión de jubilación.
- A su vez, la propuesta mencionada en este presente trabajo de investigación, con mayor evaluación del tema, podría tomarse en cuenta para futuros casos previsionales, pues al llevarse a cabo una modificatoria del artículo 24 del D.S. N° 013-2008-JUS con respecto a la pronta remisión de los actuados administrativos con la contestación de la demanda por parte de la entidad demandada ONP, se estaría logrando que el juez acelere la entrega del expediente administrativo para su pronta valoración y evaluación de acuerdo al caso previsional y de esta manera se emita sentencia en un plazo razonable; para ello se anexa al presente trabajo un proyecto de ley con la modificatoria antes expuesta. Aunando a ello que, en la actualidad se ha promulgado la Ley 30914, la misma que tiene como finalidad eliminar el dictamen fiscal como obstáculo principal en los procesos contenciosos, pues se ha visto que no se obtiene beneficio absoluto para el trámite de los procesos previsionales, pues el juez no toma en cuenta tal acto procesal en sus decisiones finales; por lo que su eliminación frenaría la dilación procesal.

## BIBLIOGRAFIA

- ABANTO REVILLA, C. (2014). Un intento de adecuación de las bases de la seguridad social al sistema privado de pensiones en el Perú. *Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo*, 1-17. Recuperado el 21 de noviembre de 2018, de [http://ejcls.adapt.it/index.php/rlde\\_adapt/article/viewFile/229/275](http://ejcls.adapt.it/index.php/rlde_adapt/article/viewFile/229/275)
- ALONSO REGUEIRA, Enrique M. & otros. (2013). Convención Americana de Derechos Humanos y su proyección en el Derecho Argentino. *La Ley y Departamento de Publicaciones de la Facultad de Derecho*, 128.
- ALPÍZAR JIMÉNEZ, I. (2011). Jubilación y calidad de vida en la edad adulta mayor. *ABRA. Revista de la Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Nacional Costa Rica*, 31(42), 15-26.
- ALVITES ALVITES, E. (2010). Contenido y límites del derecho fundamental a una pensión de jubilación. Reflexiones a propósito de una definición jurisprudencial. En *Comentarios a los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional* (págs. 879 - 907). Lima: Gaceta Jurídica.
- ANACLETO GUERRERO, V. (2016). *Proceso Contencioso Administrativo. Doctrina/Comentarios/Jurisprudencia/Modelos*. Lima: Grupo Editorial LEX & IURIS.
- APOLÍN MEZA, D. L. (2007). El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. *Foro Jurídico* 7, 83. Recuperado el 09 de agosto de 2018
- AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, Expediente N° 02214-2014-PA/TC (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 7 de Mayo de 2015).
- BARDELLI LARTIRIGOYEN, J. B. (15 de Junio de 2015). *Independencia e imparcialidad en la justicia militar a propósito de la reciente sentencia del TC*. Obtenido de [congreso.gob.pe: http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con2\\_uibd.nsf/41C31CB8B92AB5090525779E005284D5/\\$FILE/INDEPEND\\_IMPARC\\_JUST\\_MIL\\_SINT.pdf](http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con2_uibd.nsf/41C31CB8B92AB5090525779E005284D5/$FILE/INDEPEND_IMPARC_JUST_MIL_SINT.pdf)
- CASACIÓN SOBRE RECONOCIMIENTO DE AÑOS DE APORTES, 001018-2011-PIURA (Corte Suprema de Justicia de la República. Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria 10 de abril de 2013). Obtenido de <https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/bf2a1700409d005b85d2d53e05a158dc/CAS+001018-2011S.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=bf2a1700409d005b85d2d53e05a158dc>
- CASACIÓN SOBRE RECONOCIMIENTO DE MÁS AÑOS DE APORTACIÓN, 6961-2009-LA LIBERTAD (Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República 6 de diciembre de 2011). Obtenido de <https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/dd4edd8042760a7e80028d5fde5b89d6/Cas.+6961-09.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=dd4edd8042760a7e80028d5fde5b89d6>
- CASSAGNE, J. C. (2011). Proyecciones del principio de la Tutela Judicial Efectiva. *Revista IUS ET VERITAS* 43, 153-154. Recuperado el 15 de febrero de 2018, de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/12058>
- CONGRESO DE LA REPÚBLICA, P. (03 de setiembre de 2001). *Congreso.gob.pe*. Obtenido de Congreso de la República del Perú: <http://www2.congreso.gob.pe/sicr/tradocestproc/clproley2001.nsf/pley/459B5325BA7A9B0D05256D25005DA016?opendocument>
- CORONADO YABAR, J. V. (2018). *La actividad probatoria recogida en el proceso contencioso administrativo y su relación con la vulneración del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva*. Obtenido de <http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/11791>
- CRUZ MELENDEZ, R. (2011). Retiro Laboral y Ajuste a la Jubilación de Hombre y Mujeres en la Mediana Edad. *Revista Electrónica "Actualidades Investigativas en Educación"*, 11(1), 1-28. Obtenido de <http://www.redalyc.org/pdf/447/44718060016.pdf>
- DE LAMA LAURA, M. G. (2011). *Precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional en materia laboral*. Lima: Gaceta Jurídica S.A.
- ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, E. (2004). El Actual Proceso Contencioso-Administrativo Peruano, y las Peligrosas Repercusiones de no Asumir Plenamente un Contencioso de Plena Jurisdicción. *Derecho & Sociedad. Asociación Civil* 23, 9-15.

- FONTESTAD PORTALÉS, L. (Julio/Setiembre de 2006). La jurisdicción contencioso-administrativa en España. *Revista CEJ, Brasilia*(34), 62-72. Obtenido de <http://www.jf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewFile/720/900>
- GORDILLO, A. (2012). *Tratado de Derecho Administrativo y obras selectas* (Vol. v). Buenos Aires: Fundación de Derecho Administrativo.
- GUZMÁN NAPURÍ, C. (2001). El debido proceso en sede administrativa en la jurisprudencia y la doctrina peruana ¿Hoy en día todavía puede discutirse la pertinencia del mismo? *IUS ET VERITAS* N° 22, 339-347.
- HUAMAN ORDOÑEZ, L. A. (2016). La incorporación del expediente administrativo o de los actuados administrativos como pruebas en el proceso contencioso administrativo. *Revista de investigación - IUS*, 149-150. Recuperado el 20 de 02 de 2018, de <http://publicaciones.usat.edu.pe/index.php/ius/article/view/328>
- HURTADO REYES, M. (s.f.). *Conclusiones y Sugerencias*. Obtenido de Vlex.com: <https://app.vlex.com/#vid/conclusiones-sugerencias-76591918>
- JIMÉNEZ VARGAS-MACHUCA, R. (2012). Los Principios del Proceso Contencioso Administrativo. *Revista de Derecho Administrativo*. Obtenido de <http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/51069>
- LA ROSA ORBEZO, Á. O. (febrero de 2008). El Sistema previsional peruano. *Actualidad Empresarial*, 1-3.
- LANDA ARROYO, C. (2002). *El derecho fundamental al debido proceso y a la tutela jurisdiccional*. Lima: Revista Pensamiento Constitucional, Año VIII N°8 Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial.
- LANDA ARROYO, C. (2012). *El derecho al debido proceso en la jurisprudencia*. Lima: Academia de la Magistratura.
- LAW ASSOCIATION WORLD. (23 de Marzo de 2013). *La Jurisdicción. Concepto, características y los órganos jurisdiccionales. La competencia. Concepto y clases. Las cuestiones de competencia, la acumulación, la inhibición y la recusación*. Obtenido de <http://cvperu.typepad.com/blog/2013/03/la-jurisdicci%C3%B3n-concepto-caracter%C3%ADsticas-y-los-%C3%B3rganos-jurisdiccionales-la-competencia-concepto-y-clases-las-cuestion.html>
- LEDESMA NARVAEZ, M. (2009). Acceso a la jurisdicción contencioso administrativa. *Revista Oficial del Poder Judicial: Año 3, N° 5*, 174.
- MAC RAE THAYS, E. (2012). La oralidad en el proceso contencioso-administrativo en el Perú. *Ius et Praxis*(43), 49-72.
- MARTEL CHANG, R. A. (2002). *Acerca de la necesidad de legislar sobre las medidas autosatisfactivas en el proceso civil*. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Recuperado el 15 de febrero de 2018, de [http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtual/Tesis/Human/Martel\\_Ch\\_R/indice\\_Martel.htm](http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtual/Tesis/Human/Martel_Ch_R/indice_Martel.htm)
- MEJIA BETANCOURT, J. A. (2016). La carga de la prueba en el contencioso-administrativo objetivo. *Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia*(7), 143-198. Obtenido de <http://rvlj.com.ve/wp-content/uploads/2016/12/pp.-143-198-MEJIA-BETANCOURT.pdf>
- MENDOZA RAMIREZ, E. (2017). *El debido proceso. Qué reglas está aplicando la Corte Suprema*. Lima: Gaceta Jurídica S.A.
- MENESES PACHECO, C. (10 de agosto de 2008). Fuentes de prueba y medios de prueba en el proceso civil. *Ius et Praxis - año 14 - N° 2*, 43-86. Recuperado el 14 de marzo de 2018, de [https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0718-00122008000200003](https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122008000200003)
- MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. (2013). *Guía sobre la aplicación del Principio-Derecho del Debido Proceso en los procedimientos administrativos*. Lima: Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico.
- MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. (2016). *Guía práctica sobre la actividad probatoria en los procedimientos administrativos*. Lima: Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico.
- MONTENEGRO MANCO, J. C. (2013). *Control de calidad en el proceso de calificación de expedientes y su incidencia en los costos operativos del otorgamiento de pensión de jubilación Decreto Ley N° 19990*. Lima: Tesis para obtener el Título Profesional de Contador Público.

- MONZÓN VALENCIA DE ECHEVARRÍA, L. L. (2011). *Comentario Exegético a la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo*. Lima: Ediciones Legales E.I.R.L. .
- NÚÑEZ MOLINA, W. F. (2016). El expediente administrativo en el proceso contencioso administrativo y en materia pensionaria. *Revista de Derecho y Cambio Social* N° 45, 6. Obtenido de [http://www.derechoycambiosocial.com/revista045/INDICE\\_ES.htm](http://www.derechoycambiosocial.com/revista045/INDICE_ES.htm)
- OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL, P. d. (s.f.). *Pensiones en Perú y ONP: Sistema previsional y sus actores*. Recuperado el 16 de Octubre de 2018, de Pensiones en Perú y ONP: Sistema previsional y sus actores.: [https://www.onp.gob.pe/pensiones\\_peru\\_onp/sistema\\_previsional](https://www.onp.gob.pe/pensiones_peru_onp/sistema_previsional)
- ORREGO ACUÑA, J. A. (01 de abril de 2016). *Juan Andres Orrego Acuña. Abogado & Profesor*. Obtenido de [juanandresorrego.cl](http://juanandresorrego.cl): <https://www.juanandresorrego.cl/apuntes/teor%C3%ADa-de-la-prueba/>
- ORTIZ SANCHEZ, J. I. (2014). *El derecho fundamental del acceso a la justicia y las barreras de acceso en poblaciones urbanas pobres en el Perú*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- PALMA BARREDA, D. (2006). *El Rol del Juez y la función jurisdiccional*. Trujillo: Normas Legales SAC.
- PASACHE CARDENAS, C. E. (4 de Setiembre de 2014). *La Función Jurisdiccional en el Estado de derecho: Blog de Carlos E. Pasache Cárdenas*. Obtenido de Blog de Carlos E. Pasache Cárdenas. Apuntes de Derecho y Ciencias Políticas.: <http://blog.pucp.edu.pe/blog/agora/2014/09/04/la-funci-n-jurisdiccional-en-el-estado-de-derecho/>
- PORTELLA NAVARRO, D. (24 de Abril de 2016). *La Función Jurisdiccional del Estado Peruano y el Derecho Procesal Civil: Prezi.com*. Obtenido de Prezi.com: <https://prezi.com/mxqe-dn7i4to/la-funcion-jurisdiccional-del-estado-peruano-y-el-derecho-pr/?webgl=0>
- PRIORI POSADA, G. F. (2009). *Comentarios a la Ley del Proceso Contencioso Administrativo* (Cuarta ed.). Lima: ARA Editores E.I.R.L.
- QUISPE CHAVEZ, G. F. (2009). Tendencias Jurisprudenciales Sistematizadas. En C. Puntriano Rosas, F. Mesinas Montero, C. Abanto Revilla, & C. González Hunt, *El Derecho Laboral y Previsional en la Constitución* (págs. 133 - 280). Lima: Imprenta Editorial El Búho E.I.R.L. .
- RIOJA BERMUDEZ, A. (25 de mayo de 2013). *El debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva: Procesal Constitucional*. Recuperado el 5 de marzo de 2018, de Procesal Constitucional: <http://blog.pucp.edu.pe/blog/ariojabermudez/2013/05/25/el-debido-proceso-y-la-tutela-jurisdiccional-efectiva/>
- ROJAS PERALTA, C. E. (junio de 2009). Breves consideraciones sobre la prueba en el Proceso Contencioso Administrativo Peruano. Arequipa, Arequipa, Perú. Obtenido de <https://trabajadorjudicial.wordpress.com/breves-consideraciones-sobre-la-prueba-en-el-proceso-contencioso-administrativo-peruano/>
- ROMERO, C. D. (2014). *Monografías.com*. Obtenido de [monografias.com](http://www.monografias.com/trabajos106/proceso-contencioso-administrativo/proceso-contencioso-administrativo.shtml): <http://www.monografias.com/trabajos106/proceso-contencioso-administrativo/proceso-contencioso-administrativo.shtml>
- SAAVEDRA ROMO, P. (XIV-Marzo 2018). La prueba en el proceso contencioso administrativo en el Perú. *Revista Jurídica del Instituto Peruano de Estudios Forenses*(77), 125-134.
- SAENZ DAVALOS, L. (1999). La tutela del derecho al debido proceso en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. *Revista Peruana de Derecho Constitucional*, 483-564.
- SENTENCIA DE LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA, CASACIÓN N° 6961-2009-La Libertad (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 06 de diciembre de 2011). Obtenido de <https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/dd4edd8042760a7e80028d5fde5b89d6/Cas.+6961-09.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=dd4edd8042760a7e80028d5fde5b89d6>
- SENTENCIA DE LA SEGUNDA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA, CASACIÓN N° 6189-2011-LIMA (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 18 de julio de 2013).
- SENTENCIA DE LA SEGUNDA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA, CASACIÓN N° 1143-2011-Ayacucho (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 16 de abril de 2013).



- SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, Exp. N° 763-2005-PA/TC LIMA (Tribunal Constitucional 13 de abril de 2005). Obtenido de <https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00763-2005-AA.html>
- SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, Exp. 00041-2012-PA/TC (Tribunal Constitucional 23 de abril de 2013). Obtenido de <https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2014/00041-2012-AA.pdf>
- SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, 00314-2014-PHC/TC (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 24 de Octubre de 2014). Recuperado el 10 de marzo de 2018, de <https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2015/00314-2014-HC.pdf>
- SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, 01008-2013-PA/TC- PIURA (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 08 de Agosto de 2014). Obtenido de <https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2014/01008-2013-AA.pdf>
- SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, 01423-2013-PA/TC - LIMA (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 09 de Diciembre de 2015). Obtenido de <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2016/01423-2013-AA.pdf>
- SOSA GÓMEZ, C. (2015). Valor jurídico del expediente administrativo. *Revista Electrónica de Derecho Administrativo Venezolano*(5), 197-225. Obtenido de [redav.com.ve/wp-content/uploads/2015/09/Cecilia-Sosa-Goimez.pdf](http://redav.com.ve/wp-content/uploads/2015/09/Cecilia-Sosa-Goimez.pdf)
- TICONA POSTIGO, V. (1999). *El Debido Proceso y la Demanda Civil*. Lima: Rodhas.
- TICONA POSTIGO, V. (2007). El debido proceso y las líneas cardinales para un modelo procesal en el Estado Constitucional de Derecho. *Revista Oficial del Poder Judicial* 1/2 2007, 35-41. Recuperado el 2018 de febrero de 26, de <https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/5ef6ae0043eb7b8ca71ee74684c6236a/2.+Doctrina+Nacional+-+Magistrados+-+V%C3%ADctor+Ticona+Postigo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5ef6ae0043eb7b8ca71ee74684c6236a>
- TORDOYA ROMERO, H. (2011). *La Oficina de Normalización Previsional y la Administradora de Fondos de Pensiones con las jubilaciones*. Lima-Callao: Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ciencias Contables.
- WOLTERS KLUWER. (s.f.). *GUIAS JURÍDICAS.WOLTERS KLUWER*. Obtenido de WOLTERS KLUWER: [http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUmJm3MTtbLUouLM\\_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoADD\\_3NzUAAAA=WKE](http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUmJm3MTtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoADD_3NzUAAAA=WKE)

# ANEXOS

## ANEXO 1

N°	EXPEDIENTES JUDICIALES	PRETENSIÓN
1	00151-2016-0-1708-JM-LA-01	PENSION DE JUBILACIÓN
2	02344-2011-0-1706-JR-LA-03	PENSIÓN DE JUBILACIÓN
3	05714-2014-0-1706-JR-LA-04	PENSIÓN DE JUBILACIÓN
4	01475-2015-0-1706-JR-LA-03	PENSIÓN DE JUBILACIÓN
5	05700-2015-0-1706-JR-LA-02	PENSIÓN DE JUBILACIÓN
6	05536-2014-0-1706-JR-LA-03	PENSIÓN DE JUBILACIÓN
7	05042-2014-0-1706-JR-LA-03	PENSIÓN DE JUBILACIÓN
8	01039-2015-0-1706-JR-LA-04	PENSIÓN DE JUBILACIÓN
9	05335-2015-0-1706-JR-LA-06	PENSIÓN DE JUBILACIÓN
10	03307-2014-0-1706-JR-LA-02	PENSIÓN DE JUBILACIÓN
11	03635-2015-0-1706-JR-LA-06	PENSIÓN DE JUBILACIÓN
12	05377-2015-0-1706-JR-LA-04	PENSIÓN DE JUBILACIÓN
13	00204-2016-0-1706-JR-LA-05	PENSIÓN DE JUBILACIÓN
14	00468-2015-0-1706-JR-LA-04	PENSIÓN DE JUBILACIÓN
15	03612-2014-0-1706-JR-LA-03	PENSIÓN DE JUBILACIÓN
16	06661-2012-0-1706-JR-LA-03	PENSIÓN DE JUBILACIÓN
17	07341-2013-0-1706-JR-LA-04	PENSIÓN DE JUBILACIÓN
18	00229-2015-0-1706-JR-LA-04	PENSIÓN DE JUBILACIÓN
19	05080-2014-0-1706-JR-LA-04	PENSIÓN DE JUBILACIÓN
20	01551-2014-0-1706-JR-LA-04	PENSIÓN DE JUBILACIÓN
21	05274-2015-0-1706-JR-LA-04	PENSIÓN DE JUBILACIÓN
22	02626-2016-0-1706-JR-LA-04	PENSIÓN DE JUBILACIÓN
23	00557-2016-0-1706-JR-CI-06	PENSIÓN DE JUBILACIÓN
24	03307-2015-0-1706-JR-LA-06	PENSIÓN DE JUBILACIÓN
25	01500-2013-0-1706-JR-LA-04	PENSIÓN DE JUBILACIÓN
26	02505-2015-0-1706-JR-LA-02	PENSIÓN DE JUBILACIÓN
27	01609-2015-0-1706-JR-LA-05	RECONOCIMIENTO DE AÑOS DE APORTACIÓN
28	02554-2015-0-1706-JR-LA-06	RECONOCIMIENTO DE AÑOS DE APORTACIÓN
29	03400-2016-0-1706-JR-LA-05	RECONOCIMIENTO DE AÑOS DE APORTACIÓN
30	03661-2016-0-1708-JR-LA-01	RECONOCIMIENTO DE AÑOS DE APORTACIÓN

## ANEXO 2

<b>EXPEDIENTES JUDICIALES</b>	<b>PLAZO LEGAL (15 DÍAS)</b>	<b>PLAZO ADICIONAL (5 A MÁS DÍAS)</b>
00151-2016	X	X (5 días)
02344-2011	X	X (10 días)
05714-2014	X	X (20 días)
01475-2015	X	X (10 días)
05700-2015	X	X (15 días)
05536-2014	X	X (10 días)
05042-2014	X	-
01039-2015	X	X (10 días)
05335-2015	X	X (10 días)
03307-2014	X	X (10 días)
03635-2015	X	X (35 días)
05377-2015	X	X (15 días)
00204-2016	X	X (5 días)
00468-2015	X	X (10 días)
03612-2014	X	X (20 días)
06661-2012	X	-
07341-2013	X	-
00229-2015	X	X (15 días)
05080-2014	X	-
01551-2014	X	X (30 días)
05274-2015	X	X (10 días)
02626-2016	X	-
00557-2016	X	-
03307-2015	X	X (10 días)
01500-2013	X	X (25 días)
02505-2015	X	X (10 días)
01609-2015	X	X (20 días)
02554-2015	X	X (10 días)
03400-2016	X	-
03661-2016	X	X (10 días)

## **ANEXO 3**

### **PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 24 REFERIDO A LA REMISIÓN DE ACTUADOS ADMINISTRATIVOS**

#### **I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

De acuerdo a lo establecido en el artículo 11° de la Constitución Política del Perú, el Estado garantiza el libre acceso a la pensión a través de entidades públicas o privadas. El derecho previsional público se encuentra a cargo de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), la misma que se encarga de verificar que el administrado con los requisitos establecidos por ley a fin de acceder a una pensión.

Sin embargo, en muchas ocasiones la Oficina de Normalización Previsional le deniega el derecho a una pensión a los administrados aludiendo la falta de cumplimiento de los requisitos preestablecidos; por lo que, el administrado se encuentra en la obligación de recurrir a los órganos jurisdiccionales a fin de hacer valer su derecho fundamental a la pensión.

Dentro de este contexto, el Estado ha venido creando e implementando diversos mecanismos más efectivos de tutela de los pensionistas. Es así que, se creó la Ley 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, modificado posteriormente por el Decreto Legislativo N° 1067, y plasmado en el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS que, establece pautas para la remisión de los actuados administrativos a fin de obtener el expediente formado en el desarrollo del procedimiento administrativo

Sin embargo, se observa en los juzgados que los procesos con materia previsional son aquellos que ocupan una considerable carga procesal, viendo que un proceso de esta naturaleza dura más de tres años a fin de obtener una decisión de acuerdo a lo pretendido, situación que afecta gravemente la tutela efectiva de los derechos previsionales de los adultos mayores, y además del debido proceso vulnerando el derecho a la pensión.

Se vulnera el derecho a la pensión al extender los procesos previsionales de manera excesiva, siendo una principal causa la inaplicación del artículo 24 del D.S. N° 013-2004-JUS, pues la extensión de plazos que otorga el juez como posibles apremios hacen que la entidad demandada tenga una conducta renuente en la presentación del expediente administrativo, no haciendo respetar el plazo legal de 15 días establecido en la norma. Por lo que, se hace necesaria su reforma

legislativa, pues con ello se tendría por amparado los derechos fundamentales del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva de los justiciables mayores de edad, así como los principios de celeridad y economía procesal.

## **II. RELACIÓN CON EL ACUERDO NACIONAL**

La iniciativa legislativa propuesta tiene concordancia y sustento en la Política de Estado N° 13, la cual señala que promoverá la seguridad social. Asimismo, tiene concordancia con la Política de Estado N° 28, la cual establece la plena vigencia de la Constitución y de los derechos humanos y acceso a la justicia e independencia judicial.

## **III. ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO**

El presente proyecto de ley coadyuva a la correcta y eficaz administración de justicia haciendo cumplir el derecho constitucional de la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso. Debido a que su expedición permitirá garantizar los derechos constitucionales de los pensionistas, de los cuales son en su mayoría personas de la tercera edad que buscan el otorgamiento de una pensión de jubilación digna de acuerdo a sus aportaciones; obteniendo con ello la agilización de los procesos judiciales previsionales, pues si se sigue dejando que el juez otorgue plazos adicionales para la remisión de los actuados administrativos, se estaría generando un carga procesal y extensos procesos judiciales lo que afecta el principio de economía y celeridad procesal.

Asimismo, el procedimiento legislativo impulsado por el presente proyecto de ley generará un debate no sólo parlamentario sino social y además técnico, a cargo de las comisiones ordinarias asignadas al estudio de dicha normativa. En el procedimiento parlamentario impulsado por el presente proyecto, los organismos y órganos estatales vinculados con el quehacer de los pensionistas y las pensiones podrán fijar posición y presentar las propuestas de modificación que consideren convenientes para mejorar y hasta optimizar la propuesta materia de estudio.

En términos presupuestales, no se propone la creación de nuevas partidas en el presupuesto público, ni transferencias de recursos, en concordancia con las normas vigentes.

## **IV. IMPACTO DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL**

El presente proyecto de ley, de ser aprobado no dispone modificación alguna de los principios ni características del Proceso Contencioso Administrativo. Por el

contrario, busca dar cumplimiento legal y real a los derechos y principios, establecidos en el artículo 139 de la Constitución.

## **V. FÓRMULA LEGAL**

El Congreso de la República ha dado la siguiente Ley:

### **Artículo 1.- Objeto de la Ley**

La presente ley tiene como objeto modificar el Texto Único Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, a fin de perfeccionar el sistema y actualizar la normatividad vigente, con el objeto de garantizar los derechos constitucionales de los pensionistas.

### **Artículo 2.- Modificación del TUO de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo - Decreto Supremo N° 013-2008-JUS**

Modifícase el TUO de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, con la finalidad de modificar el artículo 24, quedando redactado de la siguiente manera:

### **TEXTO ACTUAL**

#### **Artículo 24°.- Remisión de actuados administrativos**

Al admitir a trámite la demanda, el Juez ordenará, de ser el caso, a la Entidad Administrativa, a fin de que el funcionario competente remita copia certificada del expediente con lo relacionado a la actuación impugnada, en un plazo que no podrá exceder de quince días hábiles, con los apremios que el Juez estime necesarios para garantizar el efectivo cumplimiento de lo ordenado, pudiendo imponer a la Entidad multas compulsivas y progresivas en caso de renuencia.

El Juez además de realizar las acciones antes referidas en el párrafo anterior, ante la manifiesta renuencia a cumplir con el mandato, prescindirá del expediente administrativo.

El incumplimiento de lo ordenado a la entidad administrativa no suspende la tramitación del proceso, debiendo el Juez en este caso aplicar lo dispuesto en el Artículo 282 del Código Procesal Civil, al momento de resolver; sin

perjuicio que tal negativa pueda ser apreciada por el Juez como reconocimiento de verdad de los hechos alegados.

## **TEXTO MODIFICADO**

### ***Artículo 24.- Remisión de actuados administrativos***

*Al admitir a trámite la demanda sobre materia previsional, el Juez ordenará, a la Entidad Administrativa demandada en estos casos, a fin de que el funcionario competente remita el expediente administrativo con lo relacionado a la actuación impugnada, anexado con el escrito de su contestación de la demanda, considerándose con ello la actuación de medios probatorios con lo cual se tendrá por apersonada, de lo contrario se declararía inadmisibile la contestación de demanda.*

*El incumplimiento de lo ordenado a la entidad administrativa no suspende la tramitación del proceso, debiendo el Juez en este caso aplicar lo dispuesto en el Artículo 282 del Código Procesal Civil, al momento de resolver; sin perjuicio que tal negativa pueda ser apreciada por el Juez como reconocimiento de verdad de los hechos alegados.*